

Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad



PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS



NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Guatemala

Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad

Informe conjunto de la Procuraduría
de los Derechos Humanos y la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala





Procurador de los Derechos Humanos
12 avenida 12-54 zona 1, Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2424 1717
Denuncias 1555
www.pdh.org.gt | pdh@pdh.org.gt
FB: PDHgt | TW: @PDHgt | IG: PDHgt | YT: PDHgt



4a. avenida 12-48 zona 10, 01010 Guatemala
Tel: (502) 2382 3400 Fax: (502) 2382 3410
www.oacnudh.org.gt | guatemala@ohchr.org
FB: OACNUDHGuatemala | TW: @Oacnudh_GT | IG: oacnudh_gt

Esta publicación ha sido producida en el marco del proyecto
"Transformando relaciones para la construcción de la paz",
del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad

Informe conjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo	6
I. Introducción	9
II. Metodología	9
III. Las personas defensoras - actoras de cambio	10
IV. Situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos	12
A. Patrones generales	12
B. Factores de riesgo	16
C. Criminalización de personas defensoras	19
D. Impacto de los ataques y afectación de las personas defensoras	25
V. Riesgos específicos que enfrentan ciertos grupos de personas defensoras	28
A. Personas defensoras de pueblos indígenas	28
B. Defensoras mujeres	31
C. Personas defensoras LGBTIQ	32
D. Periodistas defensores/as de derechos humanos	33
E. Personas defensoras en el sistema de justicia	34
F. Personas defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno	36
VI. Respuesta del Estado	39
A. Espacios de coordinación	40
B. Medidas de protección	41
C. Investigación y sanción de ataques	45
VII. Conclusiones y Recomendaciones	48



RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de sus mandatos, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) han desarrollado este informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, que abarca el período entre 1 de enero de 2017 y 30 de abril de 2019. En Guatemala, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho. Su trabajo comprende una amplia gama de acciones, desde la denuncia de violaciones de los derechos humanos hasta el desarrollo de propuestas para fortalecer la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas.

Sin embargo, las personas y organizaciones defensoras continúan enfrentando múltiples riesgos, sea en función de las diversas cuestiones de derechos humanos que defienden o de su identidad (pueblos indígenas, mujeres y personas LGBTIQ, por ejemplo). Los ataques contra personas defensoras pueden provenir de actores estatales y no estatales e incorporar diversas modalidades, a menudo utilizadas en combinación, para limitar su labor. El informe describe los riesgos específicos y múltiples que enfrentan ciertos grupos de personas incluyendo: (1) pueblos indígenas; (2) mujeres defensoras; (3) personas defensoras LGBTIQ; (4) periodista/os; (5) juezas/ces y abogada/os independientes; y (6) personas defensoras que defienden los derechos de víctimas del conflicto armado interno.

La criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, que consiste en el uso indebido del derecho penal en su contra, es una preocupación central del informe. PDH y OACNUDH señalan varios patrones observados en estos casos.

Existen varios factores estructurales que perpetúan un entorno inseguro y adverso para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Estos incluyen la estigmatización y las percepciones prejuiciosas contra las personas defensoras y los derechos humanos en general; la falta de seguridad en la tenencia/propiedad de las tierras, los territorios y los recursos naturales; la corrupción e impunidad; y la violencia, incluyendo la de carácter político en el contexto electoral. Las debilidades institucionales representan un factor transversal que limita la superación de los problemas estructurales e impide garantizar una respuesta efectiva del Estado.

Los ataques contra personas defensoras tienen impactos negativos en varios niveles, incluidas las esferas individual, familiar y colectiva/comunitaria (especialmente en el caso de los pueblos indígenas), y generan, como resultado, efectos silenciadores y de paralización de su labor.

A lo largo de los años, Guatemala ha logrado algunos avances en el desarrollo de medidas para la prevención, protección y acceso a la justicia en casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, estos avances resultan incipientes para superar los desafíos pendientes que permitan una respuesta efectiva. En consecuencia, el informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones formuladas por PDH y OACNUDH para contribuir a garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en el país.





CHIMLETB

I. INTRODUCCIÓN

1. En el marco de sus respectivos mandatos¹, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) han realizado el presente informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. El informe espera contribuir a la identificación de medidas oportunas para fortalecer la protección de las personas defensoras y apoyar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y nacionales de derechos humanos en esta materia.

2. Con base en un análisis cuantitativo y cualitativo, el informe aporta al entendimiento de la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Incluye un análisis de la situación y de diversos factores de riesgo que enfrentan las personas defensoras, sus familias y sus comunidades, y el impacto de los mismos; los factores estructurales que contribuyen a generar un entorno inseguro y adverso para la defensa de los derechos humanos; los desafíos particulares que enfrentan grupos específicos de personas defensoras; y la respuesta del Estado a esta problemática. PDH y OACNUDH reconocen la importancia de la información proveída por las instituciones del Estado, así como, particularmente la de las personas defensoras y sus organizaciones que compartieron sus historias y reflexiones para la elaboración de este informe.

II. METODOLOGÍA

3. El informe se basa en información recabada, documentada y analizada por PDH y OACNUDH y abarca el periodo de 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2019. Sin embargo, también se refiere a algunos casos emblemáticos de años anteriores cuyas consecuencias siguen hasta la fecha. Para la preparación del informe se realizaron visitas conjuntas a las regiones de Oriente (Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa); Costa Sur (San Marcos, Suchitepéquez, y Quetzaltenango); Occidente (Huehuetenango); Noroccidente (Quiché y Alta Verapaz); Nororiente (Izabal), así como diversas reuniones en la ciudad capital, entre septiembre de 2018 y marzo de 2019.

4. En total, tanto en la ciudad capital como en las regiones, se condujeron 196 entrevistas a personas defensoras de derechos humanos de todo el país, 26 provenientes de la capital y 170 de los departamentos, con base en un formulario previamente diseñado. Adicionalmente, el informe refleja información estadística oficial obtenida mediante solicitudes de información pública al Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de marzo de 2019.

1. Procuraduría de Derechos Humanos: Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, artículo 14, literal b), que establece la atribución de realizar investigaciones e informes con el fin de hacer conciencia en los diversos actores de la población sobre los derechos humanos. OACNUDH: Según el acuerdo firmado con el Gobierno de Guatemala, de enero de 2005, OACNUDH tiene el mandato de “observar e informar sobre la situación de los derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades guatemaltecas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Guatemala”.

Se condujeron 196 entrevistas

26 provenientes de la capital y 170 de los departamentos

- Ciudad capital
- Oriente (Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa)
- Costa Sur (San Marcos, Suchitepéquez, y Quetzaltenango)
- Occidente (Huehuetenango)
- Noroccidente (Quiché y Alta Verapaz)
- Nororiente (Izabal)



III. LAS PERSONAS DEFENSORAS - ACTORAS DE CAMBIO

5. Las personas defensoras cumplen un rol fundamental para la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho. Con su esfuerzo y compromiso, contribuyen a la generación de una sociedad más justa y al desarrollo de una cultura de derechos, democrática, inclusiva y participativa. Su labor activa y multifacética incluye una amplia gama de acciones, que va desde la denuncia y alerta sobre las injusticias y violaciones a los derechos humanos, pasando por la capacitación e interlocución con las autoridades y otros actores relevantes, hasta el desarrollo de propuestas de ley y de políticas públicas para fortalecer la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas.

6. Este informe refleja la caracterización de persona defensora contenida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

La Declaración afirma que es defensor o defensora de derechos humanos cualquier persona que, individual o colectivamente, promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional².

La labor de defender derechos humanos no se limita a un área profesional o a la pertenencia a un grupo específico: lo que define a una persona como defensora son las acciones que realiza. De esta forma, cualquier persona se puede convertir en un defensor o defensora de los derechos humanos al promover y defender derechos.

2. A/RES/53/144, disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx>.

“Tanto si ustedes defienden los derechos humanos bajo los reflectores de la publicidad internacional como si lo hacen en las comunidades más remotas del planeta; tanto si pueden citar cada artículo de la Declaración Universal como si actúan por instinto y conciencia; tanto si protegen a una niña o un niño de prácticas culturales dañinas, como si protegen al planeta entero de la amenaza del cambio climático, ustedes toman parte en la misma lucha universal por romper cadenas y aportar igualdad y dignidad”.

-Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos³

7. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen una presencia fuerte y vibrante en casi todo el territorio de Guatemala. Su trabajo ha constituido uno de los pilares para la transición del conflicto armado interno hacia la paz y la democracia en el país. Las personas defensoras promueven iniciativas relacionadas con todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales incluidos en los instrumentos internacionales. Esto incluye seguridad y justicia; acceso a la tierra y territorios y protección del ambiente; derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda y alimentación; y derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad, las personas migrantes, entre otros.

8. La Constitución Política de la República de Guatemala –artículos 44 y 46- reafirma las normas internacionales de derechos humanos, a las cuales atribuye rango constitucional. Algunos de estos derechos son claves para la defensa de los derechos humanos, incluyendo:

- **Libertad de expresión⁴:** el derecho a expresarse libremente y sin interferencia es un derecho universal de todas las personas. Incluye el derecho a mantener y expresar una opinión sin restricciones ni censura, y a recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación o difusión. Las personas defensoras cumplen su función tanto al ejercer este derecho como al exigir su garantía para las demás personas, sus comunidades y la sociedad en general.
- **Libertad de asociación⁵:** toda persona, incluyendo las personas defensoras, tiene derecho a organizarse y asociarse libremente, y a formar parte de grupos, ya sea formal o informalmente. Las personas defensoras pueden trabajar de manera independiente o en conjunto con otras defensoras, organizaciones y comunidades. También pueden agruparse en organizaciones o colectivos, locales, nacionales o internacionales.
- **Libertad de manifestación pacífica⁶:** la manifestación es una herramienta esencial a través de la cual las personas o movimientos pueden expresar su disconformidad ante situaciones concretas, o promover temáticas, enfoques o cambios específicos. La protesta social es una de las formas más importantes en que los grupos más marginalizados pueden hacer oír su voz y lograr visibilidad para diversas causas.
- **Acceso a la justicia:** todas las personas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna, independiente e imparcial, sin discriminación; a reparaciones integrales efectivas en caso de violaciones a sus derechos humanos; y a que se respeten las garantías del debido proceso. Las personas defensoras a menudo utilizan la vía legal para impulsar cambios que son transformadores para la sociedad.

3. <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23794&LangID=S>.

4. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 35.

5. Ibid., artículos 34 y 102.

6. Ibid., artículo 33.

IV. SITUACIÓN DE RIESGO DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

A. Patrones generales

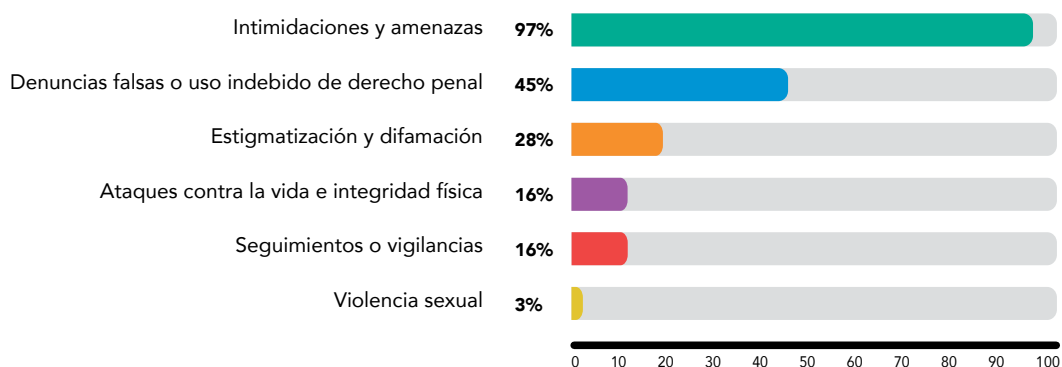
9. No cabe duda de que, aun considerando algunos esfuerzos importantes del Estado (ver sección VI), las personas defensoras de derechos humanos desempeñan su labor en un contexto adverso y de múltiples riesgos. Por décadas, y especialmente desde los tiempos del conflicto armado interno, diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han expresado su preocupación por las amenazas y represalias sufridas por las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala⁷. Esta situación adversa se agrava por los desafíos en materia de violencia e inseguridad en el país⁸.

Formas y dinámicas de agresión

10. Las agresiones que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos toman diferentes formas. La organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEHUA), registró 493 ataques y agresiones de distinta índole a personas defensoras (incluyendo 13 asesinatos) en 2017 y 391 ataques (incluyendo un alarmante número de 26 asesinatos) en 2018⁹.

11. De las 196 personas defensoras entrevistadas para este informe, un 86 % reportó haber sufrido por lo menos algún tipo de ataque o amenaza entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2019. El 58 % alegó ser víctima de múltiples formas de ataques, en más de una ocasión.

12. Con base en las entrevistas realizadas, se observan las siguientes formas de agresión:



7. El periodo del informe incluye recomendaciones de varios mecanismos internacionales de monitoreo de derechos humanos: Examen Periódico Universal (2018), A/HRC/37/9; Comité de Derechos Humanos, 2018 (CCPR/C/GTM/4), párr. 36-27; Comité contra la Tortura, 2018 (CAT/C/GTM/7), párr. 10-11, 38-29; Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, 2017 (CEDAW/C/GTM/CO/8-9), párr. 28; 17 comunicaciones enviadas por Procedimientos Especiales al Estado en 2017 y 2018 (GTM 16/2018; GTM 15/2018; GTM 13/2018; GTM 10/2018; GTM 7/2018; GTM 8/2018; GTM 6/2018; GTM 5/2018; GTM 3/2018; GTM 2/2018; GTM 1/2018; GTM 7/2017; GTM 6/2017; GTM 4/2017; GTM 5/2017; GTM 3/2017; GTM 7/2016). Todas las cartas disponibles en: <https://spcommreports.ohchr.org/>; Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de su visita oficial a Guatemala en 2018 (A/HRC/39/17/Add.3), párr. 51-61; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, 2017, capítulo 3.

8. En 2018, se registró una tasa promedio de 13 muertes violentas por día. Ver: A/HRC/40/3/Add.1 párr. 30, citando información proporcionada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (19 de octubre de 2018).

9. www.udefegua.com



13. También se registraron ataques colectivos contra comunidades completas, en particular desalojos forzados, cortes de electricidad y cifras elevadas de criminalización dentro de una misma comunidad. Es importante destacar que el informe da cuenta de los casos reportados por las personas entrevistadas en el marco de este estudio. En este sentido, no recoge la totalidad del universo de casos posibles, en particular considerando el probable sub-registro de algunos tipos de agresiones difíciles de denunciar, como por ejemplo la violencia sexual.

La interseccionalidad de los móviles de ataques

14. A menudo es difícil determinar el origen específico de los ataques, debido a la interacción de múltiples factores de riesgo que enfrentan las personas defensoras. Por los temas que defienden (por ejemplo tierras y territorios, lucha contra la corrupción e impunidad, derechos sexuales y derechos reproductivos), pueden verse amenazadas por afectar distintos intereses económicos, políticos o criminales. Por la identidad o pertenencia a determinados sectores (indígena, mujer, persona LGBTIQ, entre otros) pueden ser motivo de ataques con base en percepciones enraizadas en misoginia, racismo, homofobia o prejuicios (ver sección V). A menudo es la conexión entre amenazas múltiples la que prevalece, poniendo de manifiesto la necesidad de abordar la situación de las personas defensoras de manera integral, a través de políticas públicas que consideren las causas estructurales y múltiples de la violencia y de los riesgos.

Perfiles múltiples e interconectados de los agresores

15. Los ataques contra personas defensoras pueden provenir de actores tanto estatales como no estatales. PDH y OACNUDH recibieron información sobre el involucramiento en los ataques de actores políticos, crimen organizado (incluyendo en áreas fronterizas), seguridad privada y empresas/sector privado, o incluso personas contratadas o movilizadas para llevar a cabo los ataques. A través del análisis de los casos documentados, se observa la posible colusión entre diferentes actores a nivel local, ya sea en la autoría material o intelectual del ataque, o en acciones orientadas al encubrimiento y a asegurar la impunidad por el mismo hecho. Por ejemplo, en el caso del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar en Mazatenango, Suchitepéquez, en marzo de 2015, varias personas han sido acusadas en relación con el crimen, entre ellos 11 acusados de ser autores materiales y formar parte de una red de sicariato, dos agentes de la Policía Nacional Civil y el diputado Julio Juárez, acusado de ser el autor intelectual (ligado a proceso en febrero 2018¹⁰).

Ataques contra organizaciones

16. Las organizaciones como tal, además de las personas que las integran, son también blanco de ataques, incluyendo las organizaciones que defienden y acompañan a las personas defensoras de derechos humanos, tal como UDEFEGUA. Esto incluye vigilancia fuera de las oficinas, robos o allanamientos; amenazas de cancelar su personería jurídica; acusaciones de “ideologizar” o “manipular” a las comunidades con quienes trabajan; o ataques contra un elevado número de miembros de la organización como forma de debilitarla.

17. Algunos casos de ataques contra organizaciones incluyen, por ejemplo, la situación de varias organizaciones indígenas y campesinas, tales como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) en Alta Verapaz; el Comité de Unidad Campesina (CUC)

10. Ver: <https://www.cicig.org/casos/caso-asesinato-de-periodistas-de-suchitepequez/>.

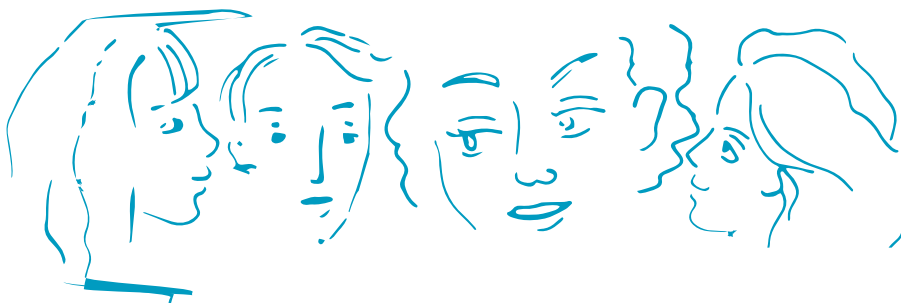
en la Costa Sur, Alta Verapaz e Izabal; el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en virtualmente todo el país; la organización Nuevo Día en Chiquimula; y la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del Pueblo Ch'orti' (COMUNDICH) en Zacapa y Chiquimula. El 8 de marzo de 2019, el Día Internacional de la Mujer, las oficinas de la Alianza Política Sector de Mujeres en la ciudad capital fueron destrozadas y documentos sensibles fueron sustraídos, por causas que todavía están bajo investigación.

18. PDH y OACNUDH también expresan preocupación por el avance en el Congreso de la República en 2018 y 2019, de iniciativas restrictivas contra organizaciones de derechos humanos, como la iniciativa de ley No. 5257 que impondría nuevos requisitos y controles legales y administrativos a las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, lo cual podría implicar restricciones a su trabajo, la paralización de operaciones o la cancelación de su personería jurídica¹¹.

Violencia en el marco político y electoral

19. También se han registrado ataques contra líderes y lideresas (incluyendo autoridades indígenas), quienes son percibidos por algunos poderes locales como amenazas políticas. Estos ataques presuntamente son orientados a quitar fuerza, presencia e incidencia de estas autoridades en los espacios políticos y de toma de decisiones. Por ejemplo, en mayo de 2018 fue asesinado en San Luis Jilotepeque, Jalapa, Luis Marroquín, director de la región del oriente de CODECA y un líder respetado, que además tenía la intención de postularse como candidato político.

20. En el contexto del período electoral en 2019¹², se documentaron incidentes de violencia contra candidatos políticos, incluyendo 5 asesinatos (2 vinculados al partido Fuerza y 3 al partido Movimiento de Liberación de los Pueblos¹³). Los actos de violencia documentados afectan en su mayoría a candidatos de partidos políticos nuevos o a aquellos que tienen plataformas en contra de la corrupción y la impunidad. Varias personas entrevistadas, incluso personas defensoras, han expresado su temor de participar como candidatas en los procesos electorales debido a estos riesgos de violencia. El Tribunal Supremo Electoral emitió un “acuerdo para un proceso transparente, ético y en paz”, con el objetivo de ayudar a prevenir la conflictividad electoral, pero 9 de los 28 partidos políticos se negaron a firmarlo, en particular los de mayor peso político.



11. Iniciativa de ley no. 5257, que reformaría el Decreto No. 02-2003 del Congreso sobre Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo. Hasta 25 de abril 2019, la iniciativa ha pasado sus primeras dos lecturas en el Congreso. Ver comunicación conjunta al Estado de varios procedimientos especiales del 27 de abril de 2018 (GTM 8/2018, disponible en: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=23772>).

12. Las elecciones son programadas para el 16 de junio de 2019.

13. Movimiento político surgido de CODECA.

B. Factores de riesgo

21. Existen diversos factores estructurales, arraigados en dinámicas de poder complejas que contribuyen a perpetuar un entorno inseguro para la defensa de los derechos en Guatemala.

Las debilidades institucionales (ya sea en términos de capacidad, de recursos económicos, de voluntad política o de respaldo legal) constituyen factores transversales que presentan barreras a la superación de los problemas estructurales y a la garantía de una respuesta efectiva del Estado.

Esto incluye, en particular, debilidades en el sistema de justicia, en las instituciones encargadas de la seguridad pública y en las instituciones con responsabilidad sobre la situación agraria en el país. Especialmente en zonas rurales del país, la débil presencia o inexistencia de institucionales del Estado, incluyendo del sistema de justicia, se suma a los patrones de discriminación y racismo. Estas circunstancias llevan a que las personas y comunidades no tengan a quién acudir para abordar sus preocupaciones y buscar protección frente a amenazas de violaciones de derechos humanos, lo que incrementa su situación de vulnerabilidad.

Limitado conocimiento o comprensión de los derechos humanos y estigmatización de las personas defensoras

22. La falta de comprensión sobre el contenido y los alcances de los derechos humanos, así como sobre la labor que desempeñan las personas defensoras, contribuye a un entorno inseguro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Esto se debe en parte a que no existe una educación cívica o de derechos humanos por parte del Estado.

23. Sumado a esto, la difamación y estigmatización de las personas defensoras son prácticas utilizadas recurrentemente con el objetivo de distorsionar la percepción sobre las personas defensoras ante la opinión pública y de alimentar prejuicios y convertirlas en objetos “legítimos” de ataques o persecución. PDH y OACNUDH registraron discursos que estigmatizan a las personas defensoras provenientes de diferentes niveles, desde figuras políticas en los niveles más altos¹⁴ hasta personas anónimas en los medios y en las redes sociales¹⁵. Estas narrativas a menudo son diseminadas a través de medios de comunicación afines a ciertos sectores políticos o económicos. En este sentido, es de preocupación que las mismas herramientas que sirven para promover la defensa de los derechos humanos -acceder a información, expresar opiniones, coordinar entre redes- son utilizadas para atacar a personas defensoras.

24. El descrédito o la deslegitimación también afectan al tratamiento que reciben las personas defensoras por parte de algunos representantes del Estado, ya que en ocasiones no son percibidas como sujetos de derechos o personas defensoras, sino como “delincuentes”, “usurpadores”, “opositores al desarrollo”, etc. Como resultado, se afecta directamente la

14. Esto incluye declaraciones de actores políticos acusando a personas defensoras de cometer actos delictivos sin que hubiera un proceso legal.

15. Por ejemplo, el sitio web izquierdacrimal.com, fue lanzado en enero de 2019. Listaba los nombres de docenas de personas defensoras y periodistas, con fotos y una descripción de las supuestas actividades delictivas que realizan.

presunción de inocencia en casos de criminalización, su protección frente a amenazas contra su vida e integridad personal o la debida investigación de denuncias interpuestas por delitos cometidos en su contra.

Inseguridades en la tenencia o propiedad de tierras, territorios y recursos naturales

25. Los ataques contra personas defensoras son particularmente prevalentes en contextos rurales, relacionados con la defensa de tierras, territorios y recursos naturales¹⁶. Persiste una dinámica agraria compleja, caracterizada por irregularidades en procesos de registro catastral; falta de reconocimiento de derechos territoriales basados en la posesión tradicional por parte de pueblos indígenas; distribución altamente desigual de los recursos agrícolas y la consiguiente concentración de las tierras cultivables¹⁷; despojos históricos de tierras y territorios de pueblos indígenas (incluyendo durante el conflicto armado)¹⁸; declaratorias de áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por comunidades fundamentalmente indígenas; y desarrollo de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales a gran escala, entre otros. Esta situación afecta especialmente a los pueblos indígenas (ver sección V) para quienes las tierras, territorios y recursos naturales son vitales para su vida colectiva, su cosmovisión y su supervivencia como pueblos.

26. La falta de mecanismos adecuados, sean legales o administrativos, para la protección de los derechos a la tierra y los recursos naturales (agua, bosques, áreas agrarias, recursos del subsuelo), deja a las comunidades en una situación de indefensión frente a terceros que compiten por el control de las mismas. Por ejemplo, en el Valle de Polochic, en Alta Verapaz e Izabal, se observó una dinámica de desplazamiento durante el conflicto armado¹⁹ y la reconcentración de la tierra postconflicto en manos de empresas de monocultivos y proyectos mineros, situación que ha generado desalojos forzosos de comunidades y criminalización de personas defensoras indígenas q'eqchi' en el presente²⁰. En este contexto, algunos ataques parecen haber tenido como objetivo controlar, dividir y debilitar a las comunidades que son percibidas como "impedimento" o que promueven visiones alternativas acerca del uso de las tierras y recursos naturales. En algunos casos, como en la región del pueblo ch'orti', los logros alcanzados por las comunidades indígenas para regularizar sus tierras fueron recibidos con hostilidad y violencia en su contra (ver párr. 56).

Corrupción e impunidad

27. La corrupción y la impunidad en el país debilitan los procesos de defensa y promoción de los derechos humanos. En Guatemala, distintas redes de corrupción o de crimen organizado llevan a cabo acciones deliberadas para controlar o influir en las instituciones del Estado en beneficio propio y para erosionar el estado de derecho y garantizar su impunidad. La gestión

16. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas defensoras en Guatemala "enfrentan los mayores peligros al nivel hemisférico por motivo de su actividad en defensa del territorio y los recursos naturales". <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114.asp>

17. El 2% de productores cultivan el 65.4% de la superficie del territorio nacional apto para uso o potencial agropecuario (producción comercial de caña de azúcar, palma aceitera, café, hule y cardamomo). El 92% de productores (clasificados como productores en condición de subsistencia o infra subsistencia) cultivan el 21.9% de esta superficie. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Más allá del Conflicto, Luchas por el Bien Estar, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, pág. 179.

18. El informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico estima que entre 500,000 y 1.500,000 personas fueron desplazadas durante el conflicto armado entre 1981-1983. Guatemala: Memoria del Silencio, párr. 66.

19. Caso Sepur Zarco, expediente C-01076-2012-00021, sentencia de 26 de febrero de 2016.

20. http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/Documentos/Informe_desalojos_Polochic_2013lr.pdf.



corrupta de los recursos públicos representa una barrera a la defensa de los derechos humanos, compromete la capacidad del Estado para prestar servicios esenciales para la realización de los derechos humanos y afecta desproporcionadamente a las personas marginalizadas en términos de poder económico y político.

28. Como agentes de cambio, las personas defensoras denuncian, investigan o documentan incidentes de corrupción, y exigen transparencia y rendición de cuentas. Por esta razón, a menudo se enfrentan a estas estructuras criminales, lo cual implica serios riesgos a sus vidas, integridad, libertad y seguridad personal. La labor de las fiscalías especializadas del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha contribuido a dismantelar estructuras de crimen organizado y a desafiar una cultura de impunidad en diferentes ámbitos. Sin embargo, la decisión en enero de 2019 del Gobierno de Guatemala de terminar el acuerdo que estableció la CICIG implica un grave riesgo de retroceso respecto a estos logros²¹.

C. Criminalización de personas defensoras

- **La criminalización consiste en el uso indebido del derecho penal, ya sea por actores estatales o no estatales, con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos²².**
- **PDH y OACNUDH analizaron 106 casos de criminalización.**

29. La criminalización de personas defensoras surge en el contexto de la falta de respuestas adecuadas, incluyendo por vías de diálogo, democráticas o judiciales, a demandas legítimas de la sociedad guatemalteca y en especial de los sectores más desfavorecidos. En este sentido, las personas, organizaciones y comunidades realizan actos de protesta, denuncia pública o manifestación pacífica, para visibilizar sus demandas y exigir respuestas, siendo a menudo criminalizadas por su participación en las mismas.

Se han observado los siguientes patrones en estos casos:

Identificación de líderes y lideresas

30. Un patrón preocupante es la identificación y criminalización selectiva de líderes y lideresas, en particular indígenas, presuntamente para debilitar movimientos de defensa de derechos humanos. Esto incluye casos de criminalización del trabajo de autoridades indígenas para la resolución de conflictos en el marco de la jurisdicción indígena. Tal es el caso de María Choc, quien en enero de 2018 fue acusada de usurpación agravada²³ y otros delitos, en relación con actos de apoyo a mujeres de la comunidad de Chab'il Cho'ch' en Livingston, Izabal, que reclamaban derecho a sus tierras tradicionales y que posteriormente fueron desalojadas.

31. PDH y OACNUDH han recibido también alegaciones sobre el uso incorrecto de algunas mesas de diálogo coordinadas por el Estado que permitieron identificar a los líderes, criminalizarlos y capturarlos. Por ejemplo, en agosto de 2018, los defensores Erwin Haroldo

21. Ver A/HRC/40/3/Add.1, párr. 5.

22. Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf>.

23. MP-282-2016-6370, Causa 18002-2017-00013.

Choc Sam y Martin Chuj Cajbon, en Alta Verapaz, fueron capturados saliendo de una mesa de diálogo con la institucionalidad agraria del Estado²⁴. Estos incidentes han afectado la confianza de las personas defensoras y de sus organizaciones o comunidades en los espacios de diálogo con el Estado y han causado renuencia a participar en los mismos, obstaculizando el abordaje de los reclamos sociales por esta vía.

Involucramiento de actores no-estatales

32. En muchos de los casos analizados, finqueros o trabajadores de diferentes empresas identifican a las y los líderes de la comunidad o movimiento²⁵; presentan denuncias en su contra; participan como querellantes adhesivos en los casos penales; o figuran como agraviados en dichos casos. Por ejemplo, el defensor indígena Bernardo Caal fue condenado a más de 7 años en noviembre de 2018, en un caso en el cual la empresa Netzone S.A. presentó la denuncia, participó como querellante adhesivo en el proceso legal y dio testimonio como supuesto agraviado de actos de detención ilegal²⁶.

33. En estos casos, PDH y OACNUDH observan que existe un desequilibrio en términos de influencia política y recursos económicos, posicionando a la persona defensora en una situación de desventaja en el proceso judicial. Aún en casos en los que el Ministerio Público ha pedido la clausura o sobreseimiento del proceso contra una persona defensora por falta de pruebas, las empresas han apelado y logrado asegurar que el proceso continúe²⁷, tal como en el caso de Abelino Chub²⁸ o de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal²⁹. En ocasiones, han participado en estos casos algunas asociaciones o grupos de interés, a pesar de no ser afectados directamente por los hechos alegados³⁰.

Problemas en el acceso a la justicia independiente e imparcial

34. Los potenciales intereses y conexiones entre los actores locales externos y el sistema de justicia suponen importantes desafíos en materia de independencia judicial. Existen serias preocupaciones sobre parcialidad y posible cooptación de actores del sistema de justicia, especialmente a nivel local. En los casos analizados, figuran con frecuencia los mismos fiscales y jueces, en particular en los departamentos de Alta Verapaz (Cobán) e Izabal (Puerto Barrios). Además, los casos de criminalización de personas defensoras tienden a avanzar de manera sensiblemente más rápida en comparación con la investigación de denuncias

24. Ver también caso de Blanca Huitz y Rolando Huitz Pop quienes fueron capturados en abril de 2017 después de salir del Ministerio Público de Cobán para el desistimiento de otro caso (caso de la hidroeléctrica Santa Rita); Caso de Julio Cuc Coc, líder de la comunidad Río Cristalino en Alta Verapaz, quien fue capturado por el delito de usurpación agravada saliendo de una mesa de diálogo de la Comisión Presidencial de Dialogo en febrero 2019 (caso comunidad Río Cristalino, Causa 16004-2009-00701).

25. Por ejemplo, a través de sus administradores, agentes de seguridad privada, o la cooptación de actores políticos y comunitarios.

26. Expediente 16005-2017-00333, Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Cobán, Alta Verapaz; Este caso fue llevado a la atención del Estado por un grupo de Relatores Especiales de las Naciones Unidas, Ver UA GTM 16/2018, disponible en: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=24251>.

27. En los casos de Abelino Chub y de los Pescadores de El Estor, el juez ordenó a la fiscalía presentar acusación a instancia del querellante adhesivo –empresas en ambos casos– a pesar de la oposición de la fiscalía por falta de evidencias suficientes.

28. Causa 18002-2016-00328.

29. MP 283-2017-1170/OJ 18002-2017-00175/18002-2017-00192 y 18002-2017-00270.

30. Por ejemplo, la Liga Pro Patria en los casos de los defensores criminalizados de San Pablo, San Marcos (Causa 437- 2014); y la Fundación contra el Terrorismo que denunció al Coronel Rubio Edgar Rubio en mayo de 2017 (por información contenida en su libro “Desde el Cuartel, Otra Visión de Guatemala”) (MP 001-2017-42631).

sobre ataques contra personas defensoras, generando preocupación por el desequilibrio en el acceso a la justicia y poniendo en cuestión la independencia e imparcialidad judicial. Es de preocupación la denuncia penal presentada en marzo 2019 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en contra de Claudia Samayoa de UDEFEGUA y José Martínez de JusticiaYa, después de que estas personas defensoras habían presentado una solicitud de antejuicio en contra de las y los jueces de esta corte, alegando irregularidades en una resolución que se emitió en enero 2019.

35. Ante esta problemática, el traslado de casos de fiscales y juzgados locales a la capital podría contribuir a asegurar la imparcialidad del Ministerio Público y del Organismo Judicial. Varios de estos casos han sido sobreesridos, clausurados o llegaron a sentencia absolutoria. Sin embargo, se observa que, aun en estos casos, no ha habido sanciones contra los actores privados que presentan denuncias infundadas, ni contra los operadores de justicia que avanzan los casos contraviniendo la normativa y procedimientos nacionales. Tampoco ha habido reparación para las personas defensoras involucradas, a pesar de los significativos impactos negativos causados. Adicionalmente, varios casos contra personas defensoras quedan abiertos sin un cierre judicial, continuando la amenaza latente de una reactivación de los mismos.

Detención de las personas defensoras

36. PDH y OACNUDH identificaron casos de uso desproporcionado de la fuerza, falta de presentación de orden de aprehensión y de captura por policías vestidos de civil o por agentes privados de seguridad. En junio de 2018, Eduardo Bin, vicepresidente del Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal, fue detenido por 5 hombres desconocidos en un pickup negro particular, sin presentación de orden de aprehensión ni explicación sobre el motivo de su detención. Durante más de 3 horas no se pudo confirmar el paradero del Sr. Bin (ni por autoridades locales del Ministerio Público, ni de la Policía Nacional Civil). Posteriormente, se confirmó que fue detenido por agentes de la Dirección para la Protección de la Naturaleza, de la Policía Nacional Civil, por el delito de usurpación de áreas protegidas³¹. Asimismo, Ricardo Pérez, del CUC en Coatepeque, Quetzaltenango, tal como ha documentado PDH y OACNUDH, fue capturado en tres ocasiones diferentes, después de la clausura provisional del caso en su contra, debido a una falta de notificación del juzgado a la policía.

Aplicación de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas

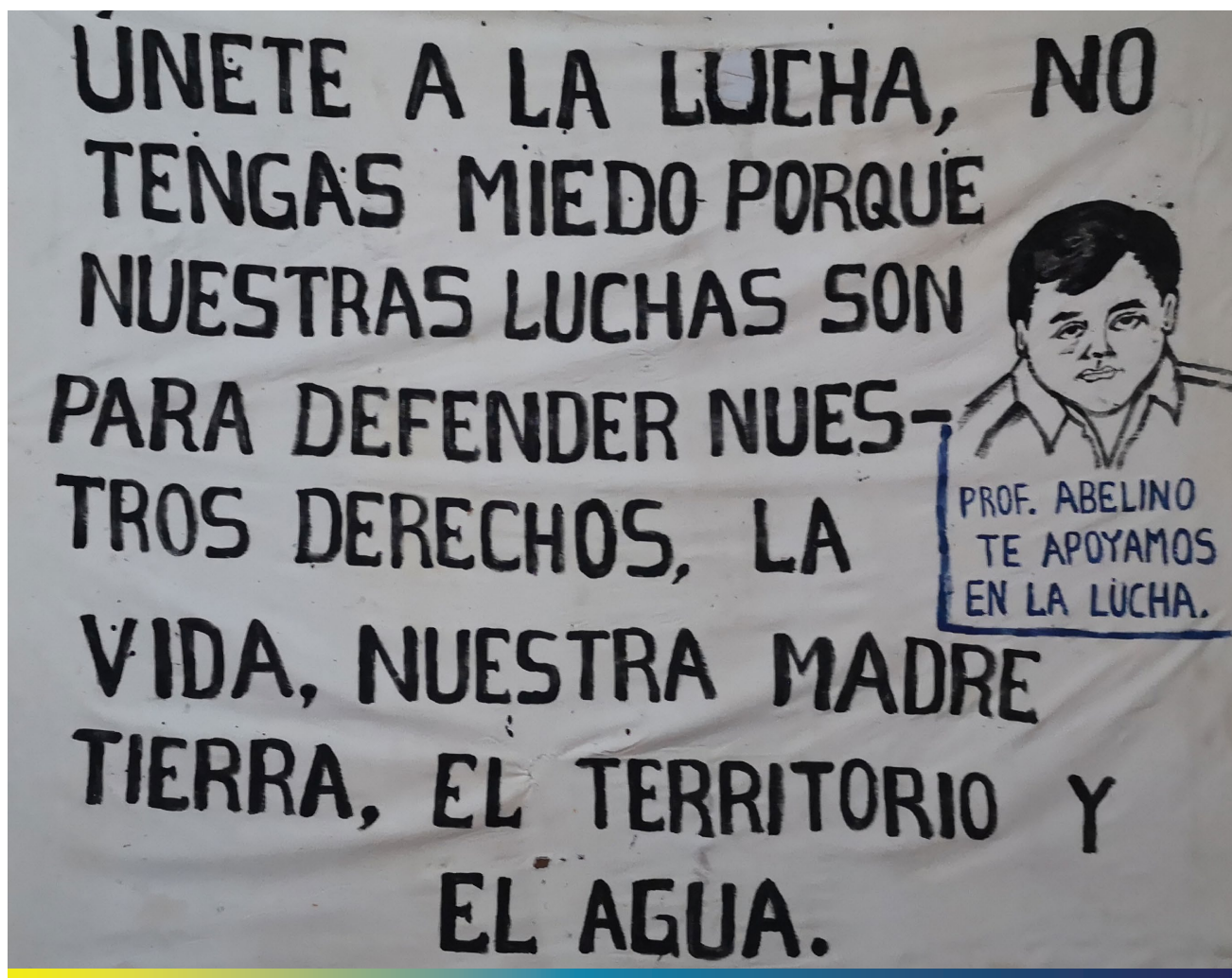
37. PDH y OACNUDH documentaron casos en los cuales no se cumple con el marco legal nacional e internacional sobre prisión preventiva³². En varios casos, las personas defensoras fueron imputadas por delitos como robo agravado, plagio o secuestro, que no son elegibles para el otorgamiento de medidas sustitutivas, presuntamente para asegurar la entrada en prisión de la persona.

38. En cuanto a las medidas sustitutivas otorgadas, se han registrado cauciones económicas elevadas, a pesar de que la mayoría de personas defensoras son de escasos recursos y que esta práctica contraviene el Código Procesal Penal³³. También preocupa que en

31. Causa 18002-2015-368. Ver: artículos 35 y 36 del Código Penal y 82 bis de la Ley de Áreas Protegidas.

32. Artículo 259, Código Procesal Penal. Ver: Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), artículo 6.1, Asamblea General, resolución 45/110, 14 de diciembre de 1990; Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, Habana, (1990), página 169, párr. 2(b).

33. Ver artículo 264: "evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la presentación."



varios casos se ha impuesto como condición para la libertad condicional la prohibición de participar en actividades vinculadas con la defensa de los derechos humanos y de relacionarse con su propia organización. Este fue el caso de Oscar Sánchez, autoridad ancestral de San Pablo, San Marcos, a quien se le prohibió, en el marco de las medidas sustitutivas, "concurrir a reuniones con líderes o representantes de los pueblos mayas del departamento de San Marcos, o por cualquier otro motivo que tenga a fin tratar lo relacionado a expulsión o falta de actividad de la empresa denominada Hidrosalá S.A."³⁴.

Débil sustento de los casos

39. La criminalización entraña la falta de calidad de las pruebas e imparcialidad en las acusaciones presentadas contra las personas defensoras, incluyendo denuncias sustentadas en hechos infundados o no constitutivos de delito. Esto se evidencia en los numerosos casos que han sido declarados sin mérito, sobreseídos, clausurados o en los cuales las personas defensoras fueron absueltas³⁵. Ejemplo de esto es el caso de los 5 defensores

34. Medidas sustitutivas otorgadas el 18 de octubre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Malacatán.

35. Por ejemplo: Fausto Sánchez, de San Pablo, San Marcos (2017); Jerson Morales y Juan Estuardo Caal en El Estor, Izabal (2018); María Toledo, Emigdio Florentino Castañeda, Alfredo Baltazar Pedro, Diego Diego Marcos, Susana Elisabet Toledo y Juana Ercita Toledo, en Santa Eulalia y Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango (2018); Juan Bautista y José Manuel Coc Saquil en Choctún Basilá, Alta Verapaz (2018); Ireneo Plutarco Clemente Pérez, de San Pablo, San Marcos (2018); y Abelino Chub Caal, de Livingston, Izabal (2019)

de Huehuetenango, en su mayoría absueltos en julio de 2016, en una decisión en la que la jueza afirmó: “cuando no hay pruebas no podemos ser arbitrarios, no podemos detener ilegalmente a las personas, porque se pierde la confianza en el sistema de justicia”³⁶.

En abril de 2019, el defensor Abelino Chub fue declarado inocente y absuelto de todos los cargos en su contra³⁷. En su fallo, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” resaltó que se pudo constatar que “se está haciendo uso del derecho penal para criminalizar la labor del acusado sin existir comisión de ningún delito”³⁸.

En el caso de autoridades indígenas, a pesar de ser absueltas, los largos procesos judiciales tienen efectos multiplicadores, resultando en un serio impacto en las comunidades que lideran.

40. A pesar de las debilidades en los casos en su contra, algunas personas defensoras han aceptado cargos, o alegan haber sido presionadas para aceptarlos, a cambio de una reducción de la pena o de los delitos imputados. Algunos defensores de la comunidad indígena ch’orti’, de Tisipe, Camotán, Chiquimula, alegaron haber sido presionados a firmar un “criterio de oportunidad” (acuerdo con el Ministerio Público para que no ejerza la acción penal a cambio de aceptación de culpabilidad y una promesa de resarcimiento y no repetición)³⁹, sin presencia de abogado, por cargos de usurpación agravada relacionados con la recuperación de un bosque comunitario. Los defensores reportaron que en el documento acordaron como medida de no repetición “dejar de luchar por la tierra”⁴⁰. Además, se registraron casos de criminalización de comunidades enteras, sin discernir ni individualizar la participación de las personas acusadas en los hechos⁴¹.

Limitaciones en torno a las garantías de debido proceso

41. Se identificaron irregularidades procesales en los casos analizados, incluyendo dificultades para el ejercicio del derecho a la defensa (especialmente frente a cargos de usurpación agravada); uso de su propio idioma⁴²; negativa de jueces a recusarse; oportunidades fuera de los plazos establecidos por la ley para el Ministerio Público de ampliar acusaciones; y entrega de expedientes del Organismo Judicial de forma fragmentada. El caso contra Dalila Mérida del CUC en Coatepeque, Quetzaltenango, por usurpación agravada, fue declarado sin mérito en septiembre de 2016, pero en junio de 2018 el Ministerio Público presentó un requerimiento reabriendo el caso (sobre el mismo hecho, involucrando a las mismas víctimas), lo que genera preocupaciones en cuanto al doble juzgamiento⁴³. PDH y OACNUDH también documentaron

36. Causa 13005-2013-139, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal en Delitos de Mayor Riesgo, Grupo “A”, Guatemala (22/07/2016), página 496; Ver: http://www.prensacomunitaria.org/el-juicio-a-las-autoridades-comunitarias-del-norte-de-huehuetenango-defensa-del-territorio-y-criminalizacion/#_ftn3.

37. Fue acusado de los cargos de asociación ilícita, incendio y usurpación agravada. Tribunal de Mayor Riesgo “A”, Expediente 18002-2016-000328 (6 de mayo de 2019).

38. El Tribunal expresó su preocupación ante el uso del derecho penal y el sistema de justicia “para resolver asuntos que deberían resolverse a través del diálogo”.

39. Código Procesal Penal, artículo 25bis.

40. José Felipe García; Nojio, Santos Tomás Gutiérrez, Bartolo Avalos Valdez, Leonil Cuanto, Mauricio Interiano; Juan Antonio Avalos Gutiérrez; David Gutiérrez Nájera.

41. Por ejemplo, el caso de la Comunidad Corozal Arriba, la Unión, Zacapa y el caso de Choctún Basilá, Cobán, Alta Verapaz.

42. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 14(3).

43. Causa 09010-2016-00489.

casos en los que personas defensoras fueron absueltas, pero permanecieron en prisión preventiva durante largos periodos mientras se resolvían varios recursos de apelación interpuestos en su contra. Como ejemplo de esto, Fausto Sánchez Roblero, líder maya mam de San Pedro, San Marcos, pasó más de dos años detenido a la espera de resoluciones de la Corte de Apelaciones, a pesar de haber sido absuelto en primera instancia⁴⁴.

Demoras en los procesos judiciales

42. Los procesos penales contra las personas defensoras criminalizadas a menudo demoran más que los tiempos establecidos por la ley⁴⁵. Esto se debe en parte a debilidades del sistema de justicia como la suspensión de audiencias, el sobrecargo de las agendas judiciales, y diversas estrategias dilatorias tales como la interposición de recursos judiciales (amparos y apelaciones). En muchos casos, las demoras en los procesos resultan en periodos extendidos de prisión preventiva, donde las personas son expuestas a riesgos adicionales como extorsiones y violencia, así como malas condiciones de vida y salubridad en los centros de detención. El defensor Abelino Chub pasó más de dos años en prisión preventiva en la Ciudad de Guatemala a la espera de la apertura del debate en su caso, iniciado el 22 de abril de 2019. En el caso de Gremial de Pescadores de El Estor, las audiencias de 4 pescadores y un periodista acusados fueron suspendidas en 5 ocasiones, posponiéndose durante más de un año. Se analizaron igualmente cientos de casos en los cuales las denuncias o emisión de órdenes de captura todavía no habían resultado en la apertura de un juicio que permita a la persona defensora defenderse. Así, las órdenes de captura quedan (a veces por meses o años) como amenazas latentes que se pueden activar en cualquier momento.

Tipos penales utilizados

43. La criminalización permite a los denunciantes la persecución relativamente rápida de personas, sin necesidad de esperar la resolución del caso por la vía del diálogo o la vía judicial ordinaria, la cual tiende a ser más lenta. Para ello, es común la utilización de los siguientes tipos penales: coacción y amenazas (delitos que se fundamentan principalmente en testimonios de la supuesta víctima o terceros); instigación a delinquir; detenciones ilegales incluso en circunstancias agravantes; hurto y hurto de fluidos (especialmente en el contexto de defensa de la energía eléctrica asequible); y asociación ilícita⁴⁶ (delito diseñado para combatir el crimen organizado, utilizado también en la persecución de movimientos sociales, especialmente contra autoridades indígenas, quienes por tradición desarrollan sus actividades de manera colectiva). También se han registrado casos en los cuales la imputación del delito (como terrorismo o sedición⁴⁷) no corresponde a los hechos, tal como en el caso del defensor Joel de Jesus Juárez, de Mataquescuintla, Jalapa en junio de 2018.

44. La utilización del delito de usurpación agravada⁴⁸ es de seria preocupación. De los 106 casos analizados, 38 (36%) fueron por este delito, imputados en el contexto de conflictos de tierra que tendrían que ser resueltos por la justicia civil y no por la vía penal. Según la tipificación del delito, la mera presencia en el inmueble es considerada comisión del delito de usurpación agravada en flagrancia, impidiendo así la presentación de pruebas sobre

44. Causa 385-2014 (18 agosto 2016) y Causa 386-2014 (3 de noviembre el 2015).

45. Código Procesal Penal, Decreto Número 17-73, artículo 323.

46. Ibid., artículos 214, 215, 394, 203, 204, 246, 249 y 396.

47. Ibid., artículos 391 y 387.

48. Ibid., artículo 257.

posibles derechos a las tierras, con base en la ocupación tradicional de pueblos indígenas, y afectando sus derechos a la presunción de inocencia y defensa legal.

Tipos penales más utilizados:

- Usurpación y usurpación agravada
- Coacción amenazas
- Instigación a delinquir
- Detenciones ilegales
- Hurto
- Hurto de fluidos
- Asociación ilícita

Es de especial preocupación el delito usurpación agravada. El 36% de los casos analizados corresponden a acusaciones por este delito.

D. Impacto de los ataques y afectación de las personas defensoras

Impacto individual

45. El ambiente hostil e inseguro en el que desempeñan su labor las personas defensoras lleva a que inviertan una buena parte de su esfuerzo y energía en protegerse y defenderse de las múltiples formas de ataques a las que están expuestas, limitando por tanto su capacidad de desarrollar su vida laboral, personal y familiar y frenando su trabajo de defensa de derechos.

46. Algunos de los actos más graves, como aquellos que involucran violencia física, pueden estar destinados a causar la muerte de la persona defensora, o bien a infligir dolor y miedo o a provocar intimidación con efectos que pueden durar muchos años o causar un daño irreversible o irreparable. Varias personas defensoras entrevistadas señalaron las graves consecuencias de los ataques sobre su salud física, mental y emocional (ansiedad, depresión, estrés postraumático, internalización del trauma), lo que puede llegar a quebrar su resistencia física y moral. En los casos de criminalización, las personas defensoras pueden pasar meses o años con los cargos en su contra, o hasta privados de su libertad, con impactos fuertes sobre sus vidas.

47. Las personas defensoras entrevistadas señalaron que su labor ha tenido también un alto coste en temas laborales y económicos. Es de preocupación el caso del Coronel Edgar Rubio, un oficial militar activo que publicó un libro analizando el papel del Ejército en violaciones de derechos humanos pasadas y presentes, quien en junio 2017 fue condenado por un tribunal militar de ser culpable de "la falta contra el prestigio, el honor, la moral y la ética del Ejército de Guatemala"⁴⁹.

48. Estas situaciones son particularmente graves para las personas sindicalistas y defensoras de los derechos laborales, quienes a menudo son despedidas por reclamar condiciones de trabajo justas. Este es el caso de la comunidad Plan Grande, cuyos miembros fueron despedidos en 2012 cuando comenzaron a exigir sus derechos laborales, después de trabajar por décadas en el cultivo de banano en régimen de colonato. Como consecuencia, fueron expulsados de la finca, sufriendo varios desalojos en 2016 y 2017. Aún queda pendiente una orden de desalojo sobre la comunidad.

49. Cédula de Notificación de la Junta de Honor (7 de junio de 2017). Ver GTM 4/2017, disponible en: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=23186>.



Impacto sobre las familias

49. Las personas defensoras expresaron repetidamente temor de que sus familias puedan ser amenazadas, atacadas o asesinadas. En algunos casos, las familias han tenido que desplazarse de sus hogares, incluso a otros países, como medida de protección.

50. Con frecuencia, las personas defensoras son el principal sostén económico de la familia. Así, el asesinato de una persona defensora conlleva no solo el dolor de su pérdida, sino también serias dificultades económicas. Por ejemplo, tras el asesinato de José Can Xol, de la comunidad Choctún Basilá, Alta Verapaz, en mayo de 2018, su familia ya no tenía suficientes ingresos para continuar con la educación de sus tres hijos. La responsabilidad de apoyar económicamente a la familia a veces recae en los hijos, quienes tienen que dejar la escuela para trabajar, impactando su derecho a la educación. En los casos de criminalización, los gastos de defensa legal también pueden ser altos, y a menudo se ha reportado que las familias son extorsionadas para garantizar la “protección” del acusado durante su paso por prisión.

51. La estigmatización y difamación de las personas defensoras también afecta a su círculo más cercano. Éstas expresaron preocupación por el acoso escolar o en el entorno en el que viven sus hijos e hijas, recibiendo insultos y comentarios como “tu padre es un criminal y un bochinchero”. Algunas personas defensoras, especialmente mujeres, reportaron que, por miedo a que sean encarceladas o asesinadas, sus familias les piden que abandonen su labor de defensa. Las mujeres defensoras además se enfrentan a los prejuicios y presiones existentes en torno al rol de la mujer en la sociedad y familia.

Ana (nombre ficticio), mujer indígena defensora de los derechos de las mujeres, trabajó durante más de 10 años contra la violencia sexual e intrafamiliar y a favor del empoderamiento económico y social de las mujeres de su región. Venía sufriendo acoso y estigmatización por parte de los hombres de su barrio desde hacía años. Decían que “había echado a perder a las mujeres”, “que por su culpa habían cambiado y ya no se comportaban”, “que su marido debería corregirla para que no se meta en los asuntos de los demás”. En enero de 2019, Ana acompañó a una joven que habría sido violada a poner una denuncia. Días después, ella y sus tres hijos recibieron amenazas de muerte. Ana denunció lo sucedido ante la policía y la fiscalía, y recibió medidas de protección perimetrales. En la práctica, la policía pasó 2 veces frente a su casa. Ana decidió hacer sus maletas, sacar a sus hijos de la escuela y dejar su hogar. Sin documentos, decidió pedir asilo, en busca de protección en otro país.

Impacto colectivo/institucional

52. Los ataques a las personas defensoras tienen un doble efecto silenciador, tanto en el aspecto individual, como en lo comunitario y lo social. Ocasionan debilitamiento o fragmentación de las comunidades y los procesos organizativos y democráticos. En ocasiones, pueden sofocar por completo reclamos legítimos. Los asesinatos de personas defensoras reconocidas y respetadas lanzan un mensaje a la sociedad de que el costo de atreverse a ejercer la defensa de los derechos humanos es alto, y que el precio a pagar puede llegar a ser la libertad o la vida.

53. Con frecuencia, los líderes y lideresas son el objetivo principal de los ataques, obstruyendo por tanto su rol de liderazgo y de organización en el seno de la comunidad, sobre todo en pueblos indígenas. La criminalización y la persecución penal de comunidades u organizaciones enteras tiene un efecto paralizante. Ante el riesgo latente y el temor a una posible detención, las personas y comunidades criminalizadas se ven limitadas en su participación en eventos públicos, en procesos de diálogo, así como en actividades de denuncia o interposición de acciones legales.

54. Esto ha pasado, por ejemplo, en las comunidades Corozal Arriba, la Unión, Zacapa o Nueva Libertad, Cobán, Alta Verapaz, en las que una gran parte de personas de la comunidad tiene orden de captura en su contra. Esto ha producido una situación de confinamiento en la que los miembros de la comunidad no salen de la misma por temor a ser detenidos, con graves consecuencias en el ejercicio de varios derechos humanos, incluyendo derechos a la educación, principalmente de niñas y niños, a la salud o a un trabajo digno.

V. RIESGOS ESPECÍFICOS QUE ENFRENTAN CIERTOS GRUPOS DE PERSONAS DEFENSORAS

A. Personas defensoras de pueblos indígenas

55. Los pueblos indígenas han ido consolidando una importante defensa de sus derechos humanos colectivos a lo largo de la historia del país. Sin embargo, continúan sufriendo altos niveles de represión como respuesta a su trabajo de defensa de sus derechos humanos, en particular derechos a las tierras y territorios, recursos naturales, libre-determinación y participación política. Para PDH y OACNUDH todavía existen en Guatemala estrategias



basadas en discriminación y racismo, para deslegitimar, incluso a través de discursos de odio, las demandas de los pueblos indígenas, las cuales pueden afectar intereses de sectores políticos o económicos poderosos.

56. Se han registrado conflictos relacionados con la toma de decisiones locales y el control de recursos comunales que son el detonante de ataques contra autoridades tradicionales indígenas (como alcaldías indígenas y asambleas comunitarias) por entidades estatales (especialmente Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- y alcaldías municipales). Este ha sido el caso, por ejemplo, en San José Poaquil, Chimaltenango, y Chuarrancho, Guatemala, donde varias comunidades indígenas, que lograron la protección de sus tierras y recursos naturales por la vía judicial, siguen enfrentando barreras en su administración por los poderes estatales locales. Además, en los municipios de Jocotán y Camotán (Chiquimula) y Gualán (Zacapa) - parte de la región del pueblo ch’orti’ - se registraron varios incidentes de violencia contra comunidades indígenas que reclamaban sus derechos a las tierras y autogobierno. Esto incluye el caso de Crisantos García, quien fue asesinado en marzo 2018 mientras dirigía la misa en la comunidad Morola, Camotán, y del alcalde indígena de la misma comunidad, Isabel Gerónimo, quien recibió amenazas de muerte un día después.

57. Un número significativo de ataques contra defensores y defensoras indígenas ocurre en el contexto del desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales. PDH y OACNUDH observan que dichos proyectos se han establecido sin el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de garantizar los derechos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, de acuerdo con los estándares internacionales⁵⁰. Algunos ejemplos incluyen al pueblo q’eqchi’ en Alta Verapaz (sobre hidroeléctricas y monocultivos) e Izabal (proyectos mineros y monocultivos); el pueblo ch’orti’ en Chiquimula (proyectos mineros); pueblos chuj y q’anjob’al en Huehuetenango (hidroeléctricas); el pueblo mam en San Marcos (hidroeléctricas y minería); y el pueblo xinka en Santa Rosa (minería). Muchas de estas actividades ocurren en áreas remotas, donde hay una presencia mínima de las instituciones del Estado, pocas oportunidades para llamar la atención sobre los graves impactos de dichas actividades y donde las comunidades enfrentan un desequilibrio significativo de poder frente a las empresas y actores privados.

58. Las comunidades indígenas alegan que las empresas han implementado prácticas divisorias en las comunidades a través de coacción o engaño (como sobornos, incentivos económicos, promesas de seguridad laboral)⁵¹. A largo plazo, estas estrategias han resultado en un deterioro gradual del tejido social de las comunidades e incluso en patrones de inseguridad y violencia. Se han observado estos patrones en los casos de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y en San Rafael las Flores, Santa Rosa, donde el desarrollo de proyectos sin consulta previa a las comunidades indígenas afectadas ha generado conflicto entre los mismos comunitarios o entre las familias. Estas situaciones se complican por la falta de presencia del Estado y la ausencia de servicios como educación, salud, electricidad, dejando a las comunidades vulnerables frente a los proyectos que llegan a sus territorios y ofrecen estos beneficios a algunos sectores.

50. Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículo 6 y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 19.

51. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales”. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de junio de 2012 (fondo y reparaciones), párr. 186.



**LAS MUJERES
ESTAMOS EN CONTRA
DE LA IMPUNIDAD.**

MUJERES IXILES
JUSTICIA PARA

MUJERES IXILES
JUSTICIA PARA TODAS

MUJERES IXILES
JUSTICIA PARA TODAS

B. Defensoras mujeres

59. El liderazgo de las mujeres defensoras en Guatemala constituye un ejemplo a seguir y abre las puertas a la participación y empoderamiento de otras mujeres y niñas de sus comunidades y entornos cercanos. La motivación de los ataques contra defensoras son multidimensionales, tanto por las actividades de defensa que realizan, como por la discriminación que enfrentan en una sociedad esencialmente sexista y desigual.

Por el hecho de ser mujeres, las defensoras están expuestas a formas de ataques y victimización específicas, como son las amenazas misóginas, la agresión sexual, difamación y estigmatización con carácter sexista -que a menudo “sexualiza” o cosifica a la mujer, atacando su honor y reputación- y ataques basados en estereotipos de género⁵².

Las mujeres indígenas, mujeres lesbianas o mujeres trans enfrentan una discriminación múltiple. Existe una preocupación por el creciente uso del concepto “ideología de género” para estigmatizar a las defensoras, así como personas defensoras LGBTIQ, a quienes acusan de destruir el “orden social” tradicional, la familia y los valores morales y religiosos.

60. PDH y OACNUDH documentaron ataques contra defensoras por desafiar los roles tradicionales de género en la sociedad. Algunos de estos se dieron desde la esfera privada, o el entorno social cercano de las defensoras (comunidad, barrio o pueblo). Se observa una estrategia de difamar a las defensoras en sus propios entornos, a modo de ejercer presión y control social en su contra. Se registraron casos de difusión de rumores sobre los comportamientos sexuales de las mujeres, sobre su idoneidad como madres o posibles relaciones extramaritales, por ejemplo.

61. Las defensoras de los derechos de las mujeres, y en particular las que trabajan con víctimas de violencia contra la mujer, enfrentan ataques constantes, incluso por parte de los propios agresores de los casos que acompañan. Las mujeres de la Red de Mujeres Ixiles en Nebaj, Quiché, han sufrido amenazas, agresiones, y difamación desde que iniciaron sus labores de acompañamiento de mujeres víctimas de violencia. En septiembre de 2018, Juana Ramírez, comadrona y lideresa de esta organización fue asesinada por personas aún desconocidas.

62. PDH y OACNUDH también documentaron casos de amenazas contra las familias de las mujeres defensoras, en particular contra sus hijos o hijas, como forma de intimidación. Este es el caso de Geidy Cu, lideresa de la comunidad indígena San Luis, Cobán, quien fue agredida fuertemente y amenazada con un cuchillo el 9 de noviembre de 2018 por dos desconocidos.

Estos le mostraron fotografías de sus hijos pequeños en su teléfono móvil, y le advirtieron que si no dejaba su rol de líder indígena “ellos [sus hijos] pagarán las consecuencias”.

52. Ver A/HRC/40/60.

C. Personas defensoras LGBTIQ

63. Las personas defensoras de la diversidad sexual y la identidad de género enfrentan riesgos debido tanto a la discriminación, homofobia y prejuicios heteronormativos que muchos padecen como miembros de la comunidad LGBTIQ, como a los temas que defienden (tales como la lucha por la legalización del matrimonio igualitario o el reconocimiento de la identidad de género). También se han registrado casos en los cuales el trabajo de las y los defensores LGBTIQ afecta intereses de estructuras de crimen organizado, especialmente redes de trata de personas y de explotación sexual, exponiéndoles a mayores riesgos.

64. Se han documentado alegaciones de delitos en contra de personas defensoras LGBTIQ, incluyendo agresiones, amenazas de muerte, vigilancia, robo de equipos y bienes en oficinas, discriminación y estigmatización, generalmente con connotaciones homofóbicas. El 25 de marzo de 2019 fue asesinado José Díaz, de 18 años, defensor de derechos de la comunidad LGBTIQ, en Huehuetenango, hallado con mensajes homofóbicos escritos en su cuerpo. Los prejuicios contra esta población, así como la falta de capacitación de los operadores de justicia o las fuerzas de seguridad sobre derechos de las personas LGBTIQ, podrían resultar en deficiencias en el registro, investigación y persecución de los responsables de estos hechos.

65. Las personas trans no tienen acceso al reconocimiento de su identidad de género por parte del Estado, viviendo en un vacío legal. Esto resulta en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) siga registrando muertes de personas trans con base en su sexo biológico.



D. Periodistas defensores/as de derechos humanos

66. Los y las periodistas ejercitan con frecuencia y defienden el derecho a la libertad de expresión y el derecho a impartir y recibir información, sea a través de sus investigaciones, columnas, o de notas sobre hechos de interés público.

67. Por su labor, los y las periodistas actúan muchas veces como defensores y defensoras, sacan a luz historias de violaciones de derechos, actos de corrupción y otros temas que afectan los intereses de grupos económicos, de poder político y de crimen organizado. Esto les hace vulnerables a recibir diferentes tipos de ataques con la intención de impedir su trabajo. Como respuesta a esta problemática, cabe resaltar la creación de una unidad de periodistas dentro del Ministerio Público en 2011 con el fin de asegurar una mayor imparcialidad en estos casos fuera de las dinámicas locales.

La unidad de periodistas del Ministerio Público ha registrado ha registrado 124 denuncias en 2017 y 89 denuncias en 2018 de ataques contra periodistas.

68. Los ataques incluyen actos de intimidación, amenazas, robo de equipos, “hackeo” de cuentas de redes sociales y actos de difamación destinados a mermar su credibilidad y la de la información que difunden frente al público al que informan (incluyendo contra mujeres periodistas o periodistas LGBTIQ con tonos sexistas u homofóbicos). A estas formas de ataque se suman las presiones por las posiciones editoriales de los medios, la censura y el cerco económico que puede, incluso, terminar con su fuente de trabajo. De especial preocupación son las situaciones de riesgo que sufren periodistas, comunicadoras y comunicadores



en las regiones fuera de la capital. En febrero de 2018 fue asesinado el periodista Laurent Castillo de 28 años de edad, de Coatepeque, Quetzaltenango. Su cuerpo fue hallado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en una finca de caña junto a su compañero publicista.

69. Los y las periodistas y otros defensores de la libertad de expresión también son víctimas de criminalización. Esto incluye el caso de Jerson Morales y Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, quienes fueron acusados por delitos de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestación ilícita, daños y detenciones ilegales, en el marco de su trabajo de reportar sobre una manifestación contra la contaminación del Lago de Izabal, supuestamente por la empresa minera CGN en mayo de 2017⁵³.

70. También es preocupante la situación de las radios comunitarias, que juegan un papel vital en la transmisión de información en sus comunidades, de una manera cultural y lingüísticamente apropiada. Los Acuerdos de Paz de 1996⁵⁴ reconocieron la importancia de favorecer el más amplio acceso a los medios de comunicación para los pueblos indígenas, mediante acciones como la reforma a la actual legislación para facilitar frecuencias. Sin embargo, las radios comunitarias siguen sin un reconocimiento legal. Las frecuencias se distribuyen en una subasta, en la cual los medios más grandes y poderosos concentran estos recursos. En noviembre 2018 fue allanada la radio comunitaria en San Francisco del Alto, Totonicapán, y las comunicadoras Silvina López Chaj y Ana Juliana González Pastor, de 21 y 30 años respectivamente fueron capturadas “en flagrancia” por el delito de hurto de frecuencia, cuando transmitían su programa “La Mirada de los Pueblos”, en una operación con 80 elementos de la policía.

E. Personas defensoras en el sistema de justicia

71. Un sistema de justicia fortalecido e independiente es indispensable para combatir la impunidad por delitos del pasado y del presente. Al mismo tiempo, el sistema de justicia ha estado en la mira de redes criminales que intentan cooptarlo con el objetivo de garantizar su impunidad y promover intereses ilícitos. En este contexto, fiscales, jueces, juezas, magistrados, magistradas y abogados y abogadas que trabajan de manera independiente, con fundamentos empíricos y conforme a la ley, para combatir la corrupción e impunidad a través de la efectiva administración de justicia, se convierten en personas defensoras de derechos humanos. Las abogadas, juezas y magistradas han sufrido además ataques sexistas, en algunos casos por parte de sus propios colegas.

72. Se observaron ataques contra operadores de justicia, sus familias y su círculo cercano, como represalia por su trabajo. Dichos ataques han estado especialmente dirigidos a: (1) fiscales del Ministerio Público, sobre todo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCECAI) y de la Fiscalía de Derechos Humanos; (2) jueces/zas con jurisdicción penal en casos de mayor riesgo relacionados principalmente con casos de corrupción y justicia de transición; y (3) magistrados/as de la Corte de Constitucionalidad garantes de la Constitución y del respeto de los derechos humanos. Además, las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el contexto de las elecciones generales de 2019, han sido estigmatizados en los

53. MP-283MP283-2017-1170. Causas/OJ 18002-2017-00175/18002-2017-00192 y 18002-2017-00270.

54. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.



medios, incluyendo por candidatos de partidos políticos y autoridades, presuntamente para desacreditar la institución y luego cuestionar los resultados de la elección.

73. PDH y OACNUDH identificaron los siguientes patrones de ataques y represalias, con el objeto de afectar la independencia e integridad de jueces/zas, magistrados/as y fiscales:

- **Uso de medios de comunicación y redes sociales:** la difusión de mensajes estigmatizantes, misóginos y/o intimidatorios con la intención de generar riesgos adicionales para las y los operadores de justicia y afectar su independencia judicial.
- **Uso malicioso de figuras legales:** como solicitudes de antejuicio para quitarles su inmunidad para que puedan avanzar casos penales en su contra, especialmente afectando a juezas/ces con competencia en casos de mayor riesgo y magistrados/as de la Corte de Constitucionalidad.
- **Denuncias espurias ante instituciones de derechos humanos:** la instrumentalización, desde 2018, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura por personas acusadas, especialmente de corrupción, denunciando a juezas/ces a cargo de sus casos de someterles a “tortura” por realizar diligencias propias del proceso penal.
- **Uso de mecanismos disciplinarios para sancionar u hostigar a ciertos juezas/ces o magistrada/os:** por ejemplo quejas recurrentes ante la Supervisión General del Ministerio Público; la Supervisión General de Tribunales; y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. También se han registrado visitas de supervisión periódicas a juezas/ces con competencia en casos de mayor riesgo en procesos de corrupción y justicia de transición.
- **Falta de mecanismos adecuados para garantizar la protección de la vida e integridad de los operadores de justicia y sus familias:** Algunos de los operadores de justicia, a pesar de contar con medidas cautelares o de protección de mecanismos nacionales e internacionales, continúan experimentando incidentes de seguridad.

74. En 2018 se dieron numerosos ataques y represalias a jueces/zas, magistrados/as y fiscales en casos de corrupción y justicia de transición. Estos ataques se incrementaron desde noviembre de 2018, tras el anuncio del Gobierno de que finalizaría unilateralmente el acuerdo con la CICIG. En particular, varios magistrados/as de la Corte de Constitucionalidad reportaron hechos de hostigamiento, intimidación y estigmatización, llegando a ser calificados, en algunos espacios públicos, como “traidores” por las decisiones que les ha correspondido emitir en relación con el mantenimiento del orden constitucional⁵⁵.

F. Personas defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno

75. Se han visto importantes avances en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, particularmente a través de sentencias históricas en casos emblemáticos, como son el caso *Genocidio Ixil, Dos Erres o Molina Theissen*. Estos avances son el resultado en gran parte del valioso esfuerzo de las víctimas o sus familiares, apoyados por actores de la sociedad civil a lo largo de las últimas tres décadas, y de fiscales, jueces y juezas comprometidos con la justicia.

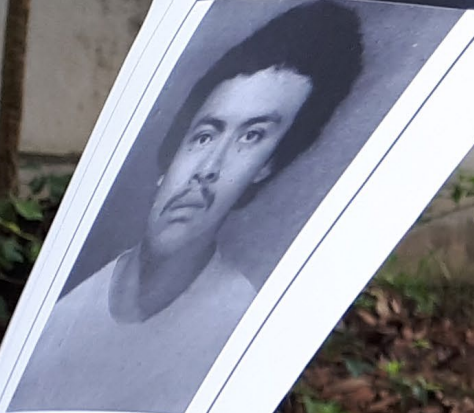
76. Sin embargo, se han registrado patrones de ataques contra personas y organizaciones que han sido centrales para que los juicios avancen, presuntamente con el objeto de detener

55. <https://www.publinews.gt/gt/noticias/2019/01/09/mantas-magistrados-la-corte-constitucionalidad-traidores.html>.

OLVIDO, NI PERDON



NI OLVIDO, NI PERDON



El nombre es César Augusto Suruy Cano
la militancia del FICOR-EGP, me asesinaron el
14 de febrero de 1984

EL J.O.S.

Hijos de la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Memoria Verdad Justicia



¿DÓNDE ESTÁN?

45,000 Detenidos - Desaparecidos por el Ejército de Guatemala



H.I.J.O.S.

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA

el esclarecimiento de la verdad y la persecución penal de presuntos autores. La mayoría de los ataques contra actores de la sociedad civil se concentran en la Ciudad de Guatemala y en los departamentos emblemáticos en casos de justicia de transición (Quiché, Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén).

En 2017 y 2018 se registraron al menos 60 ataques contra personas y organizaciones por su trabajo de promoción de la justicia de transición en el país⁵⁶.

77. En casos de justicia de transición que involucran a altos rangos del Ejército (autores intelectuales), se vieron sobre todo intimidaciones en audiencias, redes sociales y medios de comunicación. En casos contra militares de medio/bajo rango (autores materiales) se documentaron prácticas de intimidación, amenazas y estigmatización en las comunidades, particularmente contra mujeres, muchas de ellas víctimas en casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto, como por ejemplo las mujeres de *Sepur Zarco*⁵⁷, *Violencia Sexual Achí*⁵⁸, *CREOMPAZ* y *Genocidio Ixil*. Asimismo, se registraron intimidaciones y vigilancia a organizaciones acompañantes de víctimas en los procesos de justicia de transición⁵⁹, incluso por elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército.

78. En 2017 y 2018 al menos 11 personas vinculadas a casos de justicia de transición han recibido denuncias en su contra, la mayoría en los casos Genocidio Ixil y Molina Theissen. Los presuntos perpetradores de estos ataques tendrían vínculos directos con los sindicatos en los casos, incluyendo ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil. Por ejemplo, tras la sentencia condenatoria en el caso Molina Theissen, actores cercanos a grupos militares interpusieron cuatro denuncias, entre ellas una contra la familia de Molina Theissen por “simulación de delito y acusación falsa”.

79. La iniciativa de ley No. 5377 para modificar la Ley de Reconciliación Nacional, que avanzó en el Congreso a inicios del 2019, así como otros proyectos que apuntan a garantizar la impunidad⁶⁰, representan una grave amenaza para la garantía de los derechos de las víctimas, así como para la seguridad de las personas defensoras en este contexto, ya que contemplan poner en libertad a las personas condenadas o actualmente en prisión preventiva en estos casos, con el consiguiente riesgo de que pueden llevar a cabo acciones de represalia en contra de las víctimas y las personas que les acusaron⁶¹.

56. Datos de incidentes corroborados por OACNUDH con UDEFEGUA para los años 2017 y 2018.

57. Desde la sentencia en el caso Sepur Zarco (febrero de 2016) se observó un patrón de intimidación a las mujeres, incluso por parte de otros miembros de sus comunidades alegando que la violencia sexual era una “mentira” y que las víctimas del caso eran “prostitutas”. También se registraron visitas del ejército a las casas de las mujeres.

58. En el caso Violencia Sexual Achí, se registraron amenazas contra 15 mujeres testigos en el caso. La mayoría de las mujeres víctimas de la violencia siguen viviendo en las mismas comunidades que las familias de los perpetradores.

59. Incluyendo a Red de Mujeres Ixiles/Defensoría de la Mujer Ixil, Equipo Comunitario de Acción Psicosocial (ECAP), UDEFEGUA, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Bufete de Derechos Humanos, Asociación Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ), Comisión Internacional de Juristas, HIJOS, Impunity Watch, Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Asociación de Vecinos de Chicoyoguito, Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI).

60. Por ejemplo, iniciativas de ley 5466 y 5747 sobre reformas a la prisión preventiva.

61. Guatemala: El Congreso no debe aprobar una ley de “amnistía” por violaciones de derechos humanos, dicen expertos de la ONU: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24300&LangID=S>; Guatemala: Bachelet advierte que la modificación de la Ley de Reconciliación Nacional conducirá a la impunidad por graves crímenes: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24098&LangID=S>.

VI. RESPUESTA DEL ESTADO

80. A través de los años, Guatemala ha logrado algunos avances en el desarrollo de medidas para la prevención, protección, y procuración de justicia en casos de ataques a personas defensoras de derechos humanos. Estos esfuerzos se han fortalecido con la participación y acompañamiento de las mismas personas defensoras y de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Varios de estos esfuerzos fueron acompañados con asesoría de PDH y OACNUDH.

81. Si bien estas medidas representan pasos importantes, PDH y OACNUDH identificaron diversos desafíos pendientes para asegurar su consolidación y efectiva implementación. Además, todavía es necesario el fortalecimiento de una respuesta del Estado desde un enfoque integral de protección que vaya más allá de la seguridad física e incluya acciones para la sensibilización sobre la importancia de la labor de las personas defensoras; el



fortalecimiento de redes de apoyo en los ámbitos locales, nacionales e internacionales; el desarrollo de servicios de apoyo psicológico y emocional a las personas defensoras y sus familias; y medidas concertadas para abordar los factores estructurales de riesgo subyacentes identificados.

A. Espacios de coordinación

82. Diversas instituciones del Estado tienen responsabilidades específicas en materia de protección de personas defensoras. Estas incluyen: la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), a cargo del seguimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos⁶²; el Ministerio Público, encargado de la investigación y persecución penal, en particular su Fiscalía de Derechos Humanos⁶³ que atiende, entre otros, casos de delitos contra personas defensoras; y el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, responsable de la seguridad ciudadana y la protección de personas.

83. Con el fin de asegurar una respuesta coordinada en esta materia, se han creado espacios interinstitucionales para el intercambio de información y análisis de casos. Así, por ejemplo, en 2008 se creó la Instancia de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, cuya función fue “analizar el contexto, los patrones de ataques en contra de observadores y defensores de derechos humanos”⁶⁴. En las reuniones semanales de la Instancia de Análisis participaban representantes del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, COPREDEH, Ministerio de Trabajo y representantes de la sociedad civil, así como de PDH y OACNUDH como observadores.

84. Durante 10 años, la Instancia había constituido un espacio valioso para la coordinación y presentación de solicitudes de respuesta rápida ante situaciones de riesgo para personas defensoras (ver sección B, abajo sobre el proceso de análisis de riesgo), aunque se registraban desafíos en el análisis de tendencias y patrones de ataques⁶⁵. Sin embargo, en abril de 2018, debido a desacuerdos respecto a cambios abruptos en su funcionamiento anunciados por las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación, las organizaciones de sociedad civil decidieron retirarse de este espacio⁶⁶. Desde noviembre de 2018, las actividades de la Instancia de Análisis fueron suspendidas completamente por el Ministerio de Gobernación.

85. Cabe destacar los esfuerzos realizados por parte del Gobierno en 2017 y 2018 hacia el desarrollo de una política pública de protección a defensores/as, en cumplimiento de la sentencia del caso Defensor de Derechos Humanos vs. Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014⁶⁷. PDH y OACNUDH subrayan que la política pública podría ser clave para fortalecer una respuesta interinstitucional e integral a la problemática. Bajo el liderazgo de COPREDEH, se logró desarrollar un documento

62. En 2008 se creó en COPREDEH la Dirección de Mecanismos de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales (acuerdo gubernativo 486-91).

63. Creada a través del Acuerdo 3-2005 y reglamentada por el Acuerdo 37-2010.

64. Acuerdo Ministerial 103-2008.

65. A/HRC/34/3/Add.1, párr. 38; A/HRC/37/3/Add.1, párr. 41.

66. Dichos cambios impedían, entre otras cosas, la coordinación rápida de medidas de protección a través de la Instancia, requiriéndose para ello una solicitud por escrito a través de una carta al Ministro de Gobernación.

67. Sentencia Serie C 283.

borrador de la política con la participación de organizaciones de la sociedad civil, en particular UDEFEGUA, organización que fue peticionaria en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

86. A pesar de lo anterior, este proceso no ha registrado avances significativos desde mediados de 2018 y varias de las organizaciones de la sociedad civil que participaban se han retirado del mismo, señalando una falta de confianza en el proceso, principalmente debido al incremento de asesinatos contra defensores en 2018, así como los retrocesos mencionados en el funcionamiento de la Instancia de Análisis. Desde febrero de 2019, algunas instituciones del Estado han iniciado ciertos esfuerzos para retomar discusiones sobre la política pública. Sería prioritario avanzar en estos esfuerzos asegurando el involucramiento de las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil.

87. En este sentido, a pesar de los esfuerzos mencionados, durante 2018, PDH y OACNUDH observaron una reducción y cierre de espacios para el diálogo entre las diversas autoridades del Estado, la sociedad civil y las personas defensoras sobre el tema de la protección. Estos retrocesos han dado lugar a una pérdida de confianza en el sistema de protección en general.

88. Desde mediados de 2018, PDH y OACNUDH han recogido testimonios de decenas de personas defensoras que, a pesar de estar en riesgo, indican que prefieren no solicitar las medidas de protección ofrecidas porque no las perciben como un apoyo, sino más bien como un mecanismo de vigilancia o posible impedimento a su labor. En otros casos, debido a la situación de criminalización, la presencia de agentes de policía en el entorno de la persona defensora no se considera una opción viable. Si no se toman medidas concertadas en el corto plazo para superar los altos niveles de desconfianza respecto a las medidas de protección, los avances logrados en años anteriores estarían en riesgo.

B. Medidas de protección

89. Guatemala cuenta con un sistema de protección para personas que enfrentan situaciones de riesgo, entre ellas a personas defensoras de derechos humanos. Este sistema es coordinado por el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil. La Unidad de Análisis de Riesgo⁶⁸ de la DPPS realiza los análisis pertinentes para valorar los riesgos existentes y recomendar las medidas de seguridad a implementar en casos de riesgos a la vida e integridad de la persona⁶⁹. Mientras funcionaba la Instancia de Análisis, el Ministerio de Gobernación informaba semanalmente en este espacio sobre los casos bajo consideración en el sistema de protección. También existe un sistema de protección de la Dirección de Seguridad del Organismo Judicial para la protección de los operadores de justicia (jueces y juezas), pero aun en estos casos la DPPS apoya con la evaluación e implementación de las medidas de protección.

68. El trabajo de la Unidad se rige por la Orden General 25-2017 de Organización y Designación de Funciones de la Dirección de Protección de Personas y Seguridad, de la Subdirección General de Operaciones, Policía Nacional Civil.

69. Es positivo que el Ministerio de Gobernación adoptara, en octubre de 2016, un Protocolo de Medidas de Seguridad para Trabajadores Sindicalizados y Defensores del Derecho del Trabajo. Disponible en: <http://files.constantcontact.com/f41b5ebc001/b43bdb52-41d6-4184-a47e-975d4dc9137a.pdf>.

90. En su análisis del procedimiento de recepción, evaluación y otorgamiento de las medidas de protección, PDH y OACNUDH realizan las siguientes observaciones:

Acceso efectivo a las medidas de protección

91. Las medidas de protección se otorgan con base en una denuncia que la persona defensora en riesgo puede presentar ante diversas instituciones (PDH, Ministerio Público⁷⁰ o Policía Nacional Civil⁷¹), tanto a nivel local como en la capital. Se observa que no existen protocolos de actuación o criterios unificados en estas instituciones para la solicitud de medidas de protección, lo cual implica que queda al criterio subjetivo de la persona que toma la denuncia el realizar un requerimiento oficial para brindar protección. PDH y OACNUDH también registraron opiniones estigmatizantes de funcionarios públicos contra personas defensoras, especialmente a nivel local, que podrían impactar de manera negativa en la atención a las denuncias y solicitudes de medidas de protección. Por otra parte, el requisito de haber formulado una denuncia previa constituye también una barrera al acceso al sistema de protección para las personas defensoras, ya que éstas a menudo no denuncian ataques o amenazas debido al miedo a represalias y la desconfianza en la efectividad del sistema de justicia o de las autoridades locales.

En 2017 y 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, solicitó a la DPPS medidas de protección para 568 personas defensoras (140 periodistas; 98 activistas; 120 sindicalistas; 210 operadores de justicia).

Determinación del riesgo

92. A través del procedimiento de análisis de riesgo, la Unidad de Análisis de Riesgo de la DPPS clasifica si el riesgo es “bajo”, “medio”, “alto” o “grave”⁷². La denuncia sirve como base principal (y a menudo la única) de información considerada en el análisis de riesgo. Esta situación resulta problemática ya que, si en la denuncia falta información clave, esto podría perjudicar el otorgamiento de las medidas de protección. Al mismo tiempo, algunos fiscales del Ministerio Público han expresado preocupación sobre el traslado de información sensible contenida en las denuncias a la Policía Nacional Civil. Esto evidencia la necesidad de fundamentar el análisis de riesgo en una diversidad de fuentes.

93. La DPPS no cuenta con una metodología estandarizada para la realización de los análisis de riesgo, dejando un amplio margen a la subjetividad, así como a posibles presiones externas por parte de funcionarios o personalidades que solicitan protección. Es importante que la Policía Nacional Civil cuente con un “protocolo de análisis de riesgo” con criterios

70. En 2017 y 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó medidas de protección para 568 personas defensoras (140 periodistas; 98 activistas; 120 sindicalistas; 210 operadores de justicia). Entre los criterios utilizados estuvieron: tipo de delito denunciado; estado de vulnerabilidad y situación de riesgo personal y familiar; y contexto en el cual dicho defensor realiza su labor. EXP UIP 2019-000452 (26 de febrero de 2019).

71. La COPREDEH puede solicitar medidas de protección al Ministerio de Gobernación si la persona defensora cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su favor.

72. En general, se reserva el nivel de riesgo alto para casos en los cuales ya se ha materializado la amenaza, mientras que los niveles medio y bajo se atribuyen a casos en que existen amenazas de diverso alcance. De acuerdo con información proporcionada por la DPPS, el nivel de riesgo grave se atribuye en función del cargo ejercido por la persona en riesgo, y se reserva para personalidades y altos funcionarios del Estado.

mejor definidos⁷³, que le permitan recomendar el esquema de seguridad que deberá otorgarse. La decisión final de otorgar medidas de protección reside con el Viceministro de Seguridad o el Director de la Policía Nacional Civil, quienes tienen la facultad de apartarse de dicha recomendación.

Otorgamiento de medidas de protección

94. Existe una limitación para adoptar medidas flexibles en función de las necesidades individuales de cada defensora o defensor, organización o colectivo, que tengan en cuenta el contexto o la naturaleza de la labor, ya que el catálogo de medidas de protección disponibles solo cuenta con tres opciones: medidas de seguridad personales⁷⁴, perimetrales⁷⁵ y de puesto fijo⁷⁶.

95. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional Civil, la DPPS realizó 614 análisis de riesgo entre 2017 y 2018⁷⁷. De éstos, 29 fueron análisis para la revisión de medidas ya concedidas. Como resultado de dichos análisis, se recomendaron medidas perimetrales en 512 casos, personales en 22 casos, de puesto fijo en 4 casos. Se cancelaron las medidas de protección en 14 casos. Entre 2017 y 2018, se recomendaron medidas de seguridad personal (acompañamiento permanente de elementos de la policía) para tan sólo 4 activistas, 8 periodistas, 1 sindicalista y 9 operadores de justicia⁷⁸.

614 análisis de riesgo por DPPS entre 2017 y 2018 sobre personas defensoras:

Se otorgaron:

- 512 medidas perimetrales
- 22 medidas personales (4 activistas, 8 periodistas, 1 sindicalista y 9 operadores de justicia)
- 4 medidas de puesto fijo
- 14 casos de cancelación de medidas
- 69 no se concedió ninguna medida

96. Existe preocupación en torno a la transparencia y participación informada de las personas defensoras en la decisión de otorgamiento de medidas de protección. La persona defensora solo recibe la notificación de las medidas otorgadas en caso de una decisión favorable, pero no se entrega el resultado. Tampoco existe un procedimiento de apelación o revisión de los análisis para el peticionario en caso de denegación o levantamiento de las medidas de protección.

73. Resolución No. 33-2017 de diciembre de 2017 y Orden General No 25-2017 de 21 de diciembre de 2017, artículo 21.

74. La seguridad personal consiste en la designación de uno o varios agentes de la Policía Nacional Civil para escolta permanente y protección de la persona defensora; está a cargo de la DPPS.

75. La seguridad perimetral consiste en patrullajes periódicos de un lugar asociado a la defensora o defensor, como su lugar de trabajo o de residencia; la brindan las comisarías locales.

76. La modalidad de puesto fijo consiste en la designación de uno o varios agentes de la Policía Nacional Civil de forma permanente a un punto o instalaciones concretas, por ejemplo a las oficinas de una organización de sociedad civil, para realizar tareas de seguridad.

77. 261 personas sindicalistas, 175 operadores de justicia, 107 periodistas y 58 activistas; Oficio No. 476-2019/DG/CRTE (6 de marzo de 2019).

78. Ibid.

Enfoque de género y pertinencia cultural

97. PDH y OACNUDH observan que tanto el análisis de riesgo como la implementación de las medidas de protección se realizan sin un adecuado enfoque de género y de pertinencia cultural. En marzo de 2019, y a pesar de los esfuerzos realizados para integrar a más mujeres en el equipo, la Unidad de Análisis de Riesgo contaba solo con cuatro mujeres analistas (de 16 analistas en total⁷⁹), dificultando la atención especializada a defensoras. Además, solamente dos agentes de la unidad hablan un idioma maya (q'eqchi' y mam), por lo que a menudo la DPPS recurre a la comisaría más cercana para obtener el apoyo de un agente bilingüe para la traducción de las entrevistas. En ocasiones han acudido a vecinos o personas locales para realizar labores de traducción, lo cual constituye un riesgo debido a la información altamente sensible que se recolecta a través de dichas entrevistas. Es positivo que los agentes a cargo de realizar los análisis de riesgo y de prestar servicios de seguridad hayan recibido una capacitación específica en esta materia en octubre 2018⁸⁰.

Disponibilidad de recursos

98. Los elementos de la policía entrevistados señalaron preocupaciones reiteradas sobre la falta de recursos suficientes para implementar las medidas de protección. Debido a esto, señalaron que tienen que “quitar a unos para dar a otros”. Informaron también de dificultades prácticas para ponerse en contacto con las personas defensoras y para trasladarse a lugares de difícil acceso. Además, la falta de recursos de DPPS para pagar viáticos a los agentes destinados fuera de sus hogares provoca que los agentes a menudo soliciten apoyo para cubrir las necesidades de alojamiento y alimentación a las personas defensoras⁸¹. Las comisarías locales de la Policía Nacional Civil, responsables de brindar las medidas de protección perimetrales a defensoras y defensores, han expresado que no cuentan con los recursos necesarios para implementar dichas medidas (suficientes patrullas, agentes, combustible, etc.). La rotación de elementos de la policía para proporcionar protección también afecta de manera negativa la confianza de los beneficiarios incluso en cuanto al manejo de información.

Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

99. Al 30 de abril de 2019, 30 personas o colectivos de personas defensoras en Guatemala cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 de las cuales fueron otorgadas en el periodo del informe. Estas medidas son fundamentales para visibilizar la situación de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos. En algunos casos, COPREDEH ha desarrollado mesas interinstitucionales de diálogo para implementar las medidas cautelares, lo cual constituye una buena práctica que se debe fortalecer. También es importante que los funcionarios públicos con poder de decisión participen en estos espacios. Sin embargo, las medidas otorgadas en general son implementadas a través de los esquemas de protección nacional, lo que supone las debilidades ya mencionadas. PDH y OACNUDH recibieron información de casos en los

79. La Unidad de Análisis se encuentra en Ciudad de Guatemala, lo cual limita seriamente la protección de personas fuera de la ciudad y en especial en áreas rurales. Además, a menudo implica el desconocimiento del entorno cercano a la persona defensora y los riesgos y dinámicas propias de cada territorio.

80. Las y los 16 agentes analistas de la Unidad de Análisis de Riesgo recibieron una capacitación por parte de la Policía Nacional de Colombia sobre análisis de riesgo. Oficio No. 476-2019/DG/CRTE (6 de marzo de 2019).

81. Identificaron también una carencia de equipos como computadoras, fotocopadoras, impresoras, escáner, internet, cámaras, drones, grabadoras y sillas. Oficio No. 476-2019/DG/CRTE (6 de marzo de 2019).

cuales la DPPS intentó de suspender las medidas de protección de personas defensoras que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, sin tener la previa aprobación de ésta, como es el caso de la defensora Juana Bacá de la Red Mujeres Ixiles en febrero 2018 o de Colectivo Madreselva en 2017.

C. Investigación y sanción de ataques

100. La lucha contra la impunidad por ataques contra defensoras y defensores constituye una medida disuasoria y un elemento clave para la prevención de ataques ulteriores. Además, la falta de investigación y sanción de los ataques y amenazas contra las personas defensoras envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes, creando un entorno propicio para la repetición y escalamiento de dichos ataques.

101. A menudo las personas defensoras ni siquiera presentan denuncias (solo el 43 % de las personas entrevistadas reportaron haber presentado una denuncia), principalmente debido a una falta de confianza en la efectividad del sistema de justicia. En otros casos, las personas defensoras no llegan a denunciar o a comparecer como testigos porque existen procesos penales en su contra, siendo víctimas de criminalización.

102. Aún en los casos denunciados, las estadísticas disponibles respecto a la situación de impunidad son preocupantes. Por ejemplo, entre enero 2017 y diciembre 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos, unidad de activistas, recibió 353 denuncias, pero en este periodo solo 11 órdenes de captura fueron solicitadas⁸².



82. EXP UIP 2019-000452 (26 de febrero de 2019).

Sin embargo, esta cifra solo representa una mínima porción de los posibles delitos contra personas defensoras, ya que las otras fiscalías no registran si la víctima era defensora. La falta de una base de datos interinstitucional, que permita la recolección de estadísticas veraces relacionadas con la violencia contra personas defensoras y los avances en las investigaciones, representa una barrera al entendimiento de la situación de impunidad y al desarrollo de respuestas adecuadas.

En 2017 y 2018 la Fiscalía de Derechos Humanos recibió 353 denuncias sobre delitos contra activistas.

103. El Ministerio Público juega un rol fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la persecución penal de los crímenes cometidos contra personas defensoras. Es importante resaltar que existen avances del Ministerio Público en esta materia, entre los cuales se puede mencionar:

- La creación de una Fiscalía de Derechos Humanos⁸³ que cuenta con cuatro unidades especializadas sobre activistas, periodistas, sindicalistas y operadores de justicia. Éstas ayudan a proporcionar una atención más especializada y un mayor nivel de imparcialidad en los casos de delitos contra personas defensoras;
- La adopción, en mayo 2018, de un protocolo para la investigación y persecución penal de los delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos⁸⁴. El protocolo define lineamientos para la investigación inmediata de los delitos; coordinación con las y los fiscales distritales; determinación si el móvil del delito fue limitar el trabajo de defensa de derechos humanos de la víctima; e identificación de la autoría intelectual del delito. Además, se han tomado algunas medidas importantes para sensibilizar e implementar el protocolo en 2018 y 2019⁸⁵;
- Los esfuerzos en 2018 y 2019 para establecer mesas de diálogo con ciertas organizaciones de defensa de derechos para intercambiar información sobre situaciones o casos específicos;
- El inicio de la elaboración de una base de datos sobre ataques contra personas defensoras de derechos humanos;
- La intención de aumentar los recursos de la Fiscalía de Derechos Humanos. Por ejemplo, la unidad de activistas cuenta con 7 fiscales⁸⁶ y la unidad de periodistas cuenta con 11 fiscales para cubrir el país entero⁸⁷.

104. A pesar de estos aspectos positivos y el compromiso de varios fiscales, es evidente que quedan muchos desafíos por superar dentro del Ministerio Público. Esto incluye la saturación de agendas, la falta de recursos humanos y financieros suficientes, la falta de capacitación especializada, la falta de aplicación consistente de protocolos internos, las dificultades para contactar a las víctimas y testigos, y las debilidades en los informes forenses, entre otros. Preocupan también los efectos de la estigmatización de los movimientos sociales en la investigación de los casos. PDH y OACNUDH entrevistaron a fiscales quienes decían

83. Creada a través del Acuerdo 3-2005 y reglamentada por el Acuerdo 37-2010.

84. No. 5-2018. Desarrollado con el apoyo de UDEFEGUA y el y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

85. Incluyendo reuniones de mesas de trabajo, capacitación de personal y la verificación dentro de 48 horas de la implementación de medidas de seguridad de DPPS. EXP UIP 2019-000452 (26 de febrero de 2019).

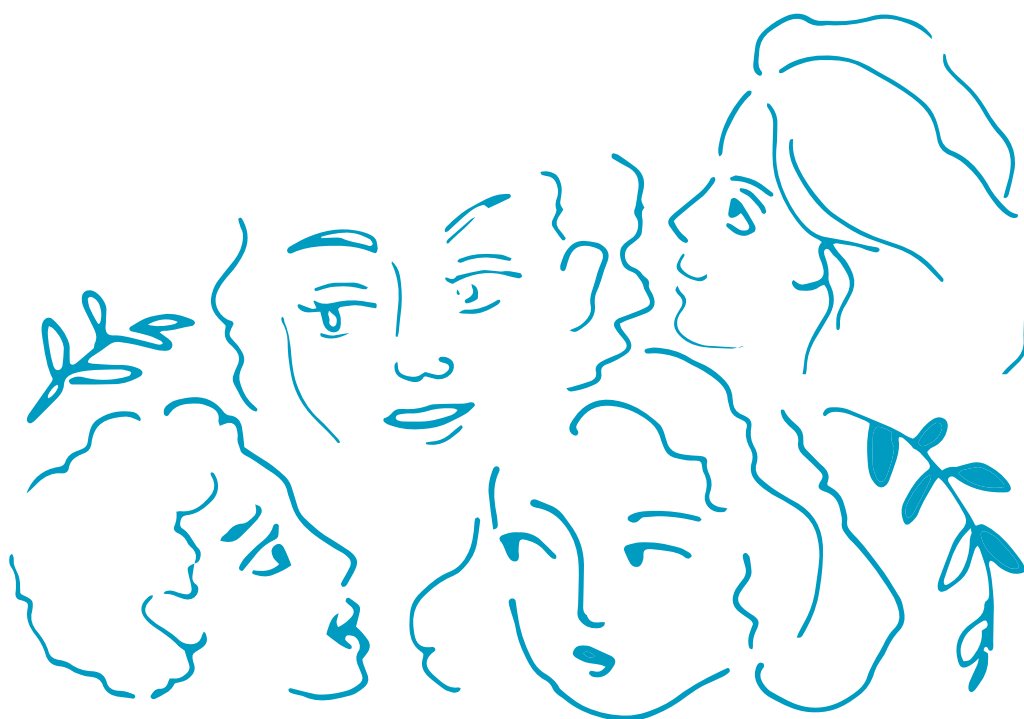
86. Hasta agosto 2018, solo contaban con 3 auxiliares y 1 fiscal.

87. Información proporcionada por el Ministerio Público.

simplemente que no existen personas defensoras de derechos humanos en el distrito o quienes compartían percepciones estigmatizadoras en su contra.

105. En ocasiones, la percepción de que algunos lugares son “conflictivos” o no existen las condiciones de seguridad necesarias para que el Ministerio Público pueda desarrollar su labor ha dificultado su tarea y provoca retrasos en las investigaciones. Por ejemplo, en el caso del asesinato del defensor indígena Carlos Maas Coc en mayo de 2017, en El Estor, Izabal, el Ministerio Público no llegó a la escena del crimen, alegando que la situación era demasiado peligrosa. Recién a finales de diciembre de 2017 se exhumó el cuerpo del defensor para realizar la necropsia⁸⁸.

106. El Organismo Judicial también desempeña una función primordial para combatir la impunidad de casos contra personas defensoras. Tal como se mencionó, en materia de justicia transicional, se han dado avances importantes al sancionar por graves violaciones de derechos humanos del pasado cometidos contra personas defensoras. Sin embargo, en general se observa una continua impunidad por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, la cual se deriva, en parte, de las deficiencias estructurales en la administración de justicia, tales como en materia de independencia judicial y acceso efectivo a la justicia, particularmente de los sectores discriminados. Preocupa, por tanto, el caso del asesinato de Adolfo Ich en 2009, en el cual la persona acusada (ex jefe de seguridad privada la empresa minera CGN) fue absuelta en mayo 2017, a pesar del testimonio de 4 testigos presenciales identificándole directamente como responsable. La sentencia también ordenó al Ministerio Público que haga una investigación por obstrucción a la justicia y falso testimonio de los querellantes y testigos, incluyendo la viuda del defensor, Angélica Choc.



88. MP 283-2017-7262.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

107. Las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones han jugado un papel crucial en las últimas décadas en Guatemala y han sido actoras centrales de cambio. Gracias a ellas se han logrado avances importantes en el fortalecimiento y consolidación de la democracia, la paz y el estado de derecho. De forma propositiva y comprometida, las y los defensores de derechos humanos han recogido y reflejado en sus acciones y propuestas la diversidad del país, considerando las múltiples y complejas realidades que enfrentan en las ciudades y los territorios, tanto a nivel individual como comunitario.

108. Sin embargo, como da cuenta este informe conjunto de PDH y OACNUDH, y debido en parte al débil trabajo del Estado en la educación y promoción de los derechos, la sociedad guatemalteca continúa asignando poco valor y relevancia a los derechos humanos en general, y a su promoción y defensa en particular. En este contexto, el trabajo de las personas defensoras es desestimado o mal entendido, o en algunos casos estigmatizado y desacreditado, incluso por parte de actores estatales. Más aún, esta labor esencial para la sociedad guatemalteca ha llevado a que algunas personas defensoras se conviertan en blanco de ataques, intimidación e incluso de criminalización.

109. El trabajo realizado por las personas defensoras de los derechos humanos abarca la diversidad de los desafíos pendientes en el país. Sigue pendiente como algo fundamental que Guatemala acoja y aproveche mejor las contribuciones y las propuestas que hacen las personas defensoras y la sociedad civil organizada. Sin ellas, los retos estructurales que enfrenta el país, especialmente en términos de desigualdad, discriminación, racismo, sexismo, homofobia y exclusión, carecen de posibilidades reales de combatirse y eliminarse.

110. Este informe muestra de manera detallada y permite identificar los múltiples riesgos que enfrentan las personas defensoras, tanto por los temas particulares de derechos humanos que promueven, como por su identidad (especialmente los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTIQ). Varios de estos grupos enfrentan riesgos específicos, basados en patrones históricos de discriminación y exclusión. Entre otras personas y sectores comprometidos en la defensa y protección de derechos, también afectados por estas circunstancias, se incluye a las y los periodistas y las personas que trabajan en el ámbito del sistema de justicia, como fiscales, jueces y juezas, en particular de mayor riesgo, así como magistradas y magistrados de las altas cortes, especialmente de la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, el informe muestra como en todos los sectores, las mujeres reciben ataques y amenazas adicionales o específicas por su condición de género.

111. Estos riesgos provocan que las personas defensoras paguen un alto precio por su labor, incluso con respecto a su vida, integridad física, su salud mental, su situación familiar y su situación económica. Estos efectos repercuten más allá de la persona defensora, con efectos multiplicadores en sus familias, sus organizaciones y sus comunidades, especialmente en el caso de los pueblos indígenas, generando temor, silencio y auto-censura.

112. Los ataques pueden provenir de actores estatales y no estatales, y estar vinculados a diversos intereses económicos, políticos y/o criminales. Pueden incorporar diversas modalidades, a menudo utilizadas en combinación o en una escalada para limitar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Los casos de la llamada criminalización representan una preocupación central de PDH y OACNDUDH y comparten patrones similares, incluyendo la criminalización recurrente por parte de algunos actores del sistema de justicia, especialmente en determinadas regiones.

113. Existen varios factores estructurales que contribuyen a generar un entorno inseguro y adverso para la defensa de los derechos en Guatemala. Entre ellos están la estigmatización y los prejuicios contra las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, así como de los derechos humanos como concepto; la inseguridad de la tenencia/propiedad de tierras, territorios y recursos naturales; la corrupción y la impunidad en el país. Las debilidades institucionales, incluyendo en la articulación de políticas y acciones y en el compromiso estatal, representan un factor transversal que contribuye a las dificultades para superar el problema de la protección de las personas defensoras y la garantía de una respuesta efectiva del Estado.

114. A lo largo de los años, Guatemala ha logrado algunos avances importantes en el desarrollo de medidas para la prevención, protección y procuración de justicia en casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos. El informe destaca estos avances, incluyendo algunas políticas en construcción, así como los desafíos pendientes para garantizar su consolidación y su implementación efectiva. Al mismo tiempo, se señalan con preocupación los retrocesos y el cierre de espacios para la coordinación interinstitucional de medidas de protección en años recientes.

115. En particular, la persistente impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones envía un mensaje peligroso de que no hay consecuencias por cometer tales delitos, creando un entorno propicio para la repetición y escalada de los mismos.

116. Para que los logros sean decisivos y traducidos en la realidad, se requiere un mayor compromiso político, así como un fortalecimiento de la articulación entre las instituciones estatales. Además, todavía es necesario fortalecer una respuesta del Estado desde un enfoque integral que vaya más allá de la protección de la seguridad física de los defensores de los derechos humanos a uno que garantice un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en Guatemala, y que comienza por el reconocimiento público de la importancia de su labor.



B. Recomendaciones

117. En específico, PDH y OACNUDH recomiendan que:

Adopción de una política pública de protección integral

A. Se aborde de manera integral la situación de las personas defensoras de derechos humanos, comenzando por la prevención hacia la protección y la procuración de justicia, asegurando un mayor compromiso político y respaldo legal. Para lograrlo, es esencial el desarrollo de una política pública de protección integral, construida con la participación de las personas defensoras y sus organizaciones, que cuente con un presupuesto adecuado para su implementación, e incluya un enfoque diferenciado sobre personas defensoras indígenas, mujeres, LGBTIQ, periodistas y operadores de justicia. La política pública integral debería incluir también los aspectos a continuación.

Prevención de ataques contra las personas defensoras

B. Las instituciones del Estado a todos los niveles desarrollen y emitan mensajes públicos de reconocimiento y apoyo a la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, así como mensajes para combatir los estereotipos y prejuicios en su contra, y sensibilizar a los funcionarios públicos sobre la importancia del trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos.

C. El Congreso de la República implemente una agenda legislativa que garantice la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica de las personas, y deje sin efecto la iniciativa de ley 5257 sobre reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.

D. Las instituciones del Estado establezcan espacios permanentes de acercamiento, diálogo y toma de decisiones con las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, para conocer sus puntos de vista respecto a decisiones que les afecten, y para atender las preocupaciones y evitar violaciones a los derechos humanos. Estos espacios también son importantes para fortalecer la democracia, la generación de confianza y nuevas relaciones entre las instituciones del Estado y las personas defensoras.

Protección de la vida e integridad

E. Las instituciones competentes (Ministerio Público y Policía Nacional Civil en particular) desarrollen criterios objetivos, claros y unificados para determinar los casos en los cuales se transmite una denuncia al Ministerio de Gobernación para la realización de una solicitud de medidas de protección.

F. El Ministerio de Gobernación asegure el respaldo institucional y legal de la Dirección de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) y:

1. Desarrolle una metodología estandarizada con criterios objetivos en los procesos de análisis de riesgo y la revisión de las medidas de protección;
2. Asegure la participación de las personas defensoras en los procesos de análisis de riesgo, en su actualización cuando sea necesario, y en la revisión de las medidas de protección;

3. Evalúe y tome en cuenta los riesgos individuales y colectivos de las distintas categorías y géneros de las personas defensoras;
4. Desarrolle un catálogo de medidas de protección amplio y flexible, aplicando una atención diferenciada en base a las necesidades específicas de las personas; y
5. Tome medidas concertadas de construcción de confianza entre las personas defensoras y los agentes de la Policía Nacional Civil.

G. El Ministerio Público y el Organismo Judicial aseguren la acción penal con estricta observancia del ordenamiento jurídico nacional e internacional, y desarrollen protocolos o instrucciones internas para evitar el uso indebido del derecho penal, en particular garantizando que:

1. Todo hecho imputado sea constitutivo de delito y conforme al principio de legalidad;
2. Los testimonios y otras pruebas que fundamenten los cargos sean susceptibles de acreditarse probatoriamente;
3. La imputación de los cargos respete el principio de responsabilidad penal individual y la presunción de inocencia;
4. Se tome en consideración el contexto de defensa de derechos humanos de la persona defensora acusada y la función que cumplen las autoridades ancestrales, autoridades comunitarias, lideresas y líderes en el abordaje de las denuncias;
5. Se revisen los casos pendientes y desestimen/declaren sin mérito aquellos que no cumplen con estos requisitos mínimos, así como se impulsen acciones legales o administrativas contra las personas que presentan denuncias falsas y contra los operadores de justicia que avanzan estos casos.

Combate a la impunidad

H. El Ministerio Público:

1. Implemente adecuadamente la instrucción No. 5-2018 sobre delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y garantice la supervisión de su cumplimiento, incluyendo mesas de intercambio con personas defensoras y sus organizaciones para informar y evaluar su aplicación;
2. Asegure la investigación independiente y oportuna, y –de ser el caso- la persecución en contra, tanto de los autores materiales como los autores intelectuales de delitos contra personas defensoras;
3. Asegure un apoyo apropiado a la Fiscalía de Derechos Humanos y fortalezca la capacidad técnica de las fiscalías distritales y municipales en materia de derechos humanos; y
4. Garantice la atención a personas defensoras víctimas de delitos sin discriminación alguna, con enfoque de género e interculturalidad.

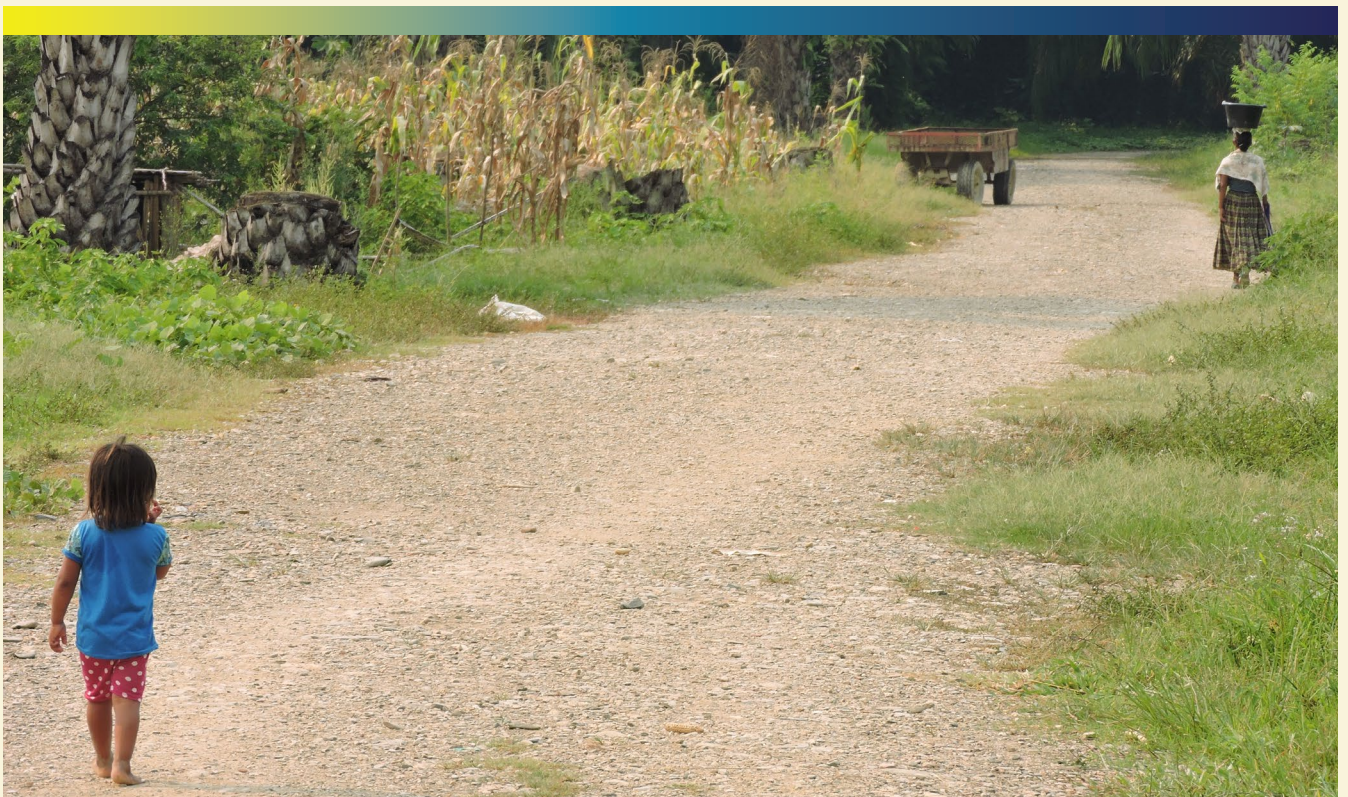
I. Las instituciones competentes (Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, COPREDEH, entre otras) establezcan mecanismos de intercambio de información interinstitucional, con la participación de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer el análisis de casos de violencia cometidos contra personas defensoras e identificar medidas de protección y prevención de ataques. PDH y OACNUDH podrían dar asistencia técnica en estos espacios.

J. Las instituciones del Estado responsables creen y aseguren la interconexión de bases de datos de casos de delitos contra personas defensoras y las medidas de protección otorgadas, para facilitar la coordinación interinstitucional; el análisis de patrones de ataques (regiones, actores, modus operandi); y la evaluación de la implementación y efectividad de las medidas de protección otorgadas.

En el marco del periodo electoral

K. Los partidos políticos y sus candidaturas incorporen en sus agendas un enfoque de derechos humanos, incluyendo las prioridades de derechos humanos desarrolladas en cooperación con las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil, para la transformación de los retos estructurales que enfrentan el país y lograr así una sociedad más inclusiva y un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.

L. Las autoridades competentes tomen medidas concertadas para asegurar la participación política y prevenir la violencia en el contexto electoral, particularmente contra personas defensoras de derechos humanos participando como candidatas, y se investigue y sancione los delitos electorales y otros delitos cometidos en este contexto.





Con el apoyo de:



Peacebuilding
United Nations Peacebuilding Fund